Toluca de Lerdo, Estado de México, a 1 de diciembre de 2020.

**DIPUTADAS Y DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA DIRECTIVA**

**DE LA LX LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO**

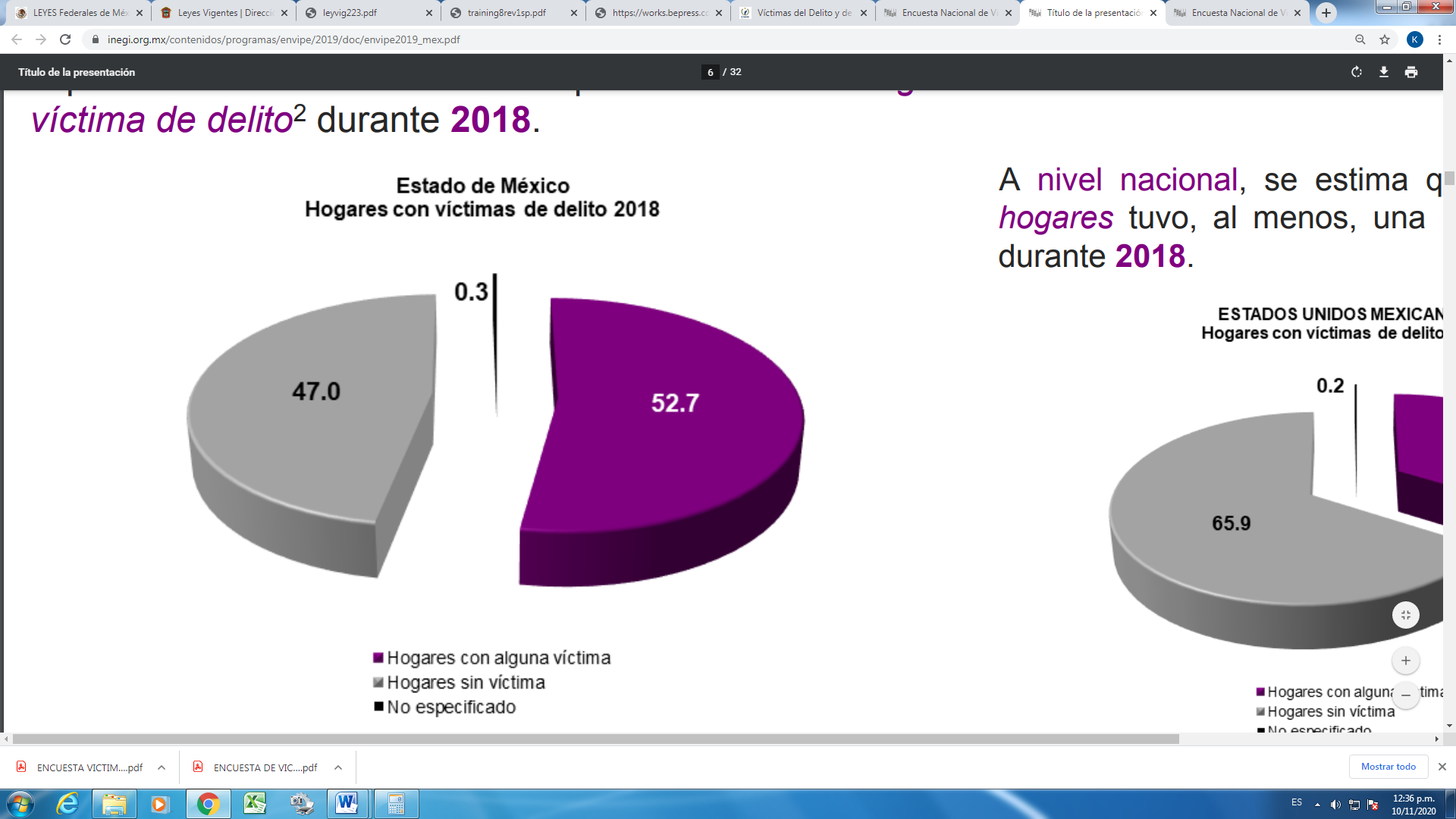
**P R E S E N T E S**

**Diputada** **Karina Labastida Sotelo**, integrante del **Grupo Parlamentario del Partido Morena** y en su nombre, con fundamento en los artículos 6 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 51, fracción II; 57 y 61, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 38, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, así como el 68 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a su elevada consideración, la iniciativa de **Ley de Víctimas del Estado de México**, que abroga la expedida el 17 de agosto de 2015, conforme a la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

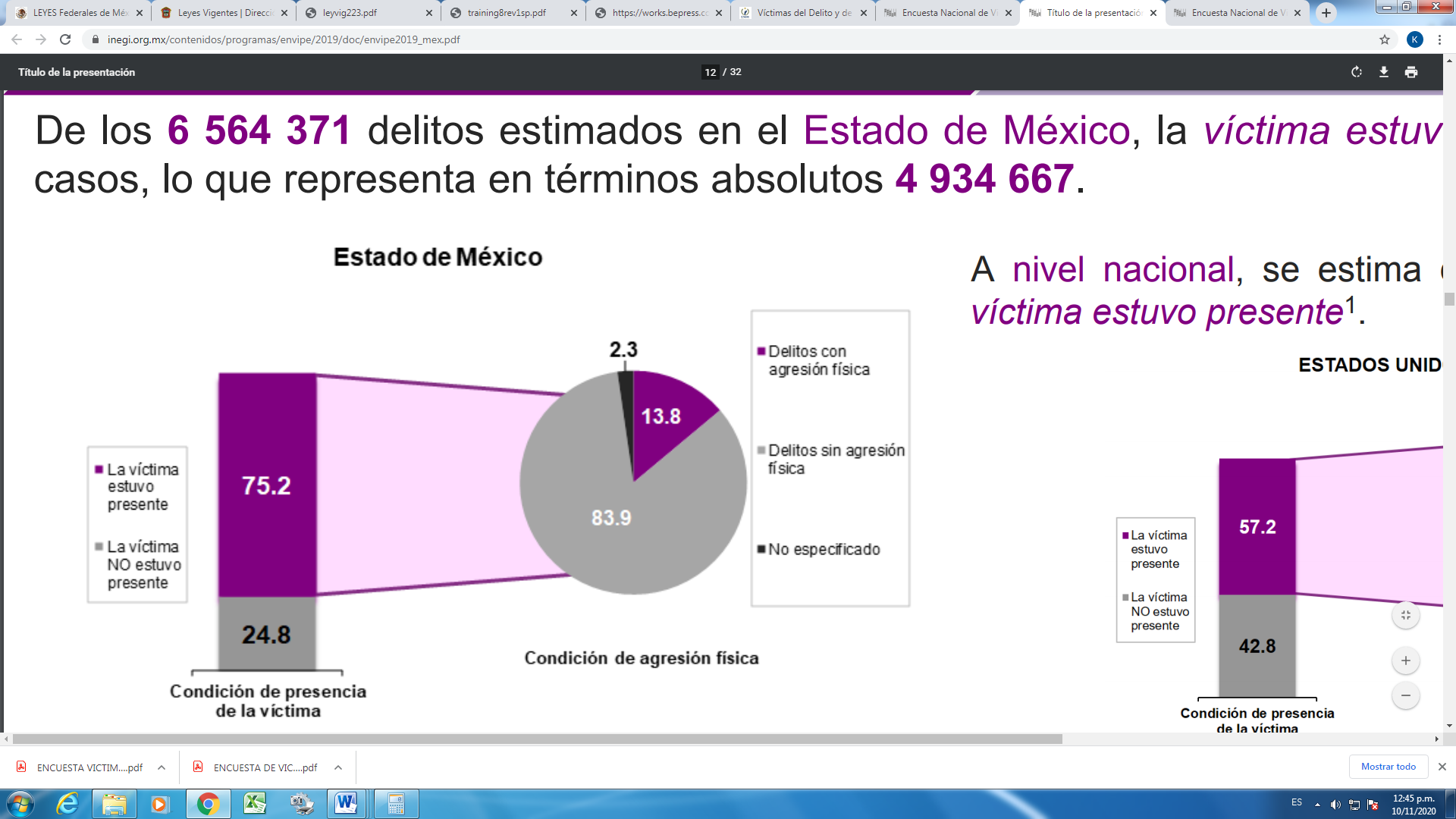
El Estado de México vive desde hace varios años un fenómeno delictivo a gran escala. En los últimos meses, los **presuntos delitos** registrados por el **Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,** en el periodo de enero a septiembre 2020 suman **251 mil 208.**

Las víctimas son miles. La última **Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019,** con información obtenida en 2018, estima que durante ese año, **52.7%** de los hogares en el Estado de México tuvo al menos, una **víctima del delito**.[[1]](#footnote-1)



La **ENVIPE 2019** revela que la cifra negra de delitos no denunciados en el Estado de México fue de **93.6%,** identificando que los principales motivos por los que las víctimas no denuncian son atribuibles a la autoridad y que entre ellos destacan, en un **34%** la consideración de la denuncia como una **pérdida de tiempo** y en un **21.4%** la **desconfianza en la autoridad.**

La **ENVIPE 2019**, registra que la tasa de víctimas por cada **100 mil habitantes** en el Estado de México, fue de **44 mil 778 hombres** y **38 mil 297 mujeres.** De los **6 millones, 564 mil, 371** delitos estimados, **90.3%** de los casos la víctima manifestó haber sufrido un **daño:**



Estos indicadores de victimización, con tendencia al alza, evidencian las debilidades institucionales y normativas existentes en la entidad, pero no son los únicos. Otro elemento que denota la precariedad del Estado de su función de justicia y de protección de las víctimas, la constituye la aparición de fenómenos indeseables en la entidad mexiquense: la autodefensa de las víctimas (reales o potenciales), quienes adquieren armas, amurallan sus casas o negocios, contratan guardias y los linchamientos.

Estos últimos, por su gravedad en territorio mexiquense, fueron analizados en el **“Informe Especial sobre los Linchamientos en el Territorio Nacional**, **2019”** de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.[[2]](#footnote-2) Hasta el año de 2017, el Estado de México contaba con **9** **municipios rojos con incidencia de linchamientos:** Amecameca, Ecatepec de Morelos Juchitepec Nezahualcóyotl Ocoyoacac, Teotihuacán, Texcoco, Toluca y Zumpango.[[3]](#footnote-3)

Los “linchamientos” son una regresión a una aparente “justicia por propia mano” que quedan impunes o son solapados por actos de corrupción,[[4]](#footnote-4) que devalúan las acciones emprendidas por las autoridades respecto a sus políticas públicas y la atención que se les proporciona a las víctimas “que no han alcanzado los resultados esperados para la lograr la preservación del Estado de derecho, ni el fortalecimiento de las instituciones públicas que conlleven a la observancia de los derechos humanos”.[[5]](#footnote-5)

La debilidad institucional imperante, permite inferir que, a partir de la entrada en vigor de la actual Ley de Víctimas del Estado de México -esto es del 17 de agosto de 2015 a la fecha-, los esfuerzos realizados para la implementación y operación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, han sido insuficientes y desarticulados, pues si bien, esta legislación puso en operación una estructura de protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas, sus disposiciones al no encontrarse armonizadas a la Ley General de Víctimas y a los principales instrumentos y declararaciones internacionales en la materia, se encuentran ante un proceso inacabado que impide transformar la realidad de miles de víctimas, garantizar sus derechos, especialmente, el derecho de no repetición.

En ese sentido, la presente iniciativa propone abrogar la Ley de Víctimas del Estado de México y expedir una nueva Ley con disposiciones armonizadas a la Ley General de Víctimas y a parámetros universales e interamericanos; la cual se compone de 187 artículos (de los cuales ocho son transitorios), que se dividen en cinco Títulos que tratan de las “Disposiciones Generales”, “De las Víctimas”, “De las Medidas de Ayuda, Asistencia, Atención y Reparación” y “Del Sistema Estatal de Atención a Víctimas y de la Atención Integral”.

La Ley de Víctimas del Estado de México que se pone a consideración de esta Asamblea, contiene, entre otras, las innovaciones siguientes:

Deja atrás el concepto de “ofendido” para considerar, exclusivamente, el término de “víctima”.[[6]](#footnote-6)

Define y distingue las víctimas directas, indirectas, potenciales y colectivas. Además de desarrollar los conceptos antes citados -concorde a la Ley General de Víctimas y atendiendo al sistema de derechos humanos-, se amplía la calidad de *víctimas indirectas*, para considerar -además de los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan relación inmediata con ella- a **“quienes por su cercanía o actuar hayan resultado comprobablemente afectadas por el hecho victimizante”;** así como *víctimas potenciales*, no sólo a las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, sino también a quienes hayan presenciado la **“comisión del hecho victimizante”**.

Establece los *principios* mediante los cuales deberán ser diseñados, implementados y evaluados los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en la Ley, ampliando el catálogo establecido en la Ley General de Víctimas, pues además de los previstos en ésta, se consideran el enfoque interseccional, la perspectiva de género, la presunción de inocencia, la resiliencia, la solidaridad, la subsidiariedad y el enfoque de justicia transicional. Este último principio prioriza la atención de las víctimas y su dignidad, para protegerlos verdaderamente de los abusos de las autoridades y de otras violaciones de derechos. Al establecer la justicia transicional como un principio rector de la aplicación de la Ley, el Grupo Parlamentario morena, busca servir a la justicia en el Estado de México, lograr la reconciliación, restaurar la paz y fortalecer el estado de derecho.

Reconoce los derechos de las víctimas, aglutinándolos en el Título Segundo, denominado, “De las Víctimas”. Este Título, que se encuentra dividido en doce Capítulos, sintetiza los principales derechos a favor de aquéllas acopiados de la Ley General de Víctimas, la **Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder**[[7]](#footnote-7)**;** el **Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul)** yel **Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional;**[[8]](#footnote-8)desglosándose en: “De los derechos al trato digno y justo”, “De los Derechos de Acceso a la Justicia”, “De los Derechos a la Seguridad, a la Protección y a la Confidencialidad” y “De los Derechos a la Reparación Integral, a la Verdad y a la Memoria”, “De los Derechos de Ayuda, Asistencia y Atención”, “De los Derechos de Participación”, “De los Derechos de las Víctimas Colectivas”, “De los Derechos de las Personas Potenciales” y “Otros Derechos”, incluyéndose un capítulo “De las Obligaciones de las Víctimas” y “Causas del Retiro de Asistencia y Atención Integral”.

Incluye, en el Título Tercero, las Medidas de Ayuda, Asistencia, Atención y Reparación para las Víctimas; entre las Medidas de Ayuda, se incluye aquellas que se deben prestar de manera inmediata, las de alojamiento y alimentación, las de traslado, de protección y de asesoría jurídica; por cuanto hace a las Medidas de asistencia y atención se plantean las de carácter económico y de desarrollo, de atención y asistencia en materia de procuración y administración de justicia; así como Medidas de reparación integral: medidas de restitución, de rehabilitación, de compensación, de satisfacción y de no repetición, éstas últimas buscan que el delito o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir.

Crea el **Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Estado de México** como la instancia superior en el Estado, encargada de la formulación y coordinación de políticas públicas y tendrá por objeto la planeación, consolidación y supervisión de los planes, proyectos, programas, servicios y acciones institucionales e interinstitucionales que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en el ámbito estatal y municipal en coordinación con la federación y los sectores social y privado. Se integra por diferentes dependencias y órganos del Poder Ejecutivo, por distintas Comisiones del Poder Legislativo, por el Poder Judicial y órganos autónomos (Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México).

Cabe señalar que a diferencia de la Ley de Víctimas vigente en la entidad, se incluyen en la estructura del Sistema citado, dos órganos esenciales en para su funcionamiento: la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México.

También crea el **“Centro para la Construcción de Memoria, Verdad y Justicia en el Estado de México”**, con el propósito de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cuente con una dirección encargada de la investigación y estudio para recuperar y construir la memoria histórica y social de las víctimas a partir de los relatos colectivos sobre las violaciones a derechos humanos y procesos victímales de larga data en diversos contextos.

Finalmente, con el Centro para la Construcción de Memoria, Verdad y Justicia en el Estado de México, no sólo buscamos generar conocimiento especializado basado en los principios de justicia, memoria, verdad, y no repetición, mediante un método interdisciplinario, que permita la elaboración de la política pública en materia víctimal, sino también contribuir activamente a la generación de planes de acción y estrategias académicas, institucionales y de política pública que incidan en los procesos legislativos, programas y acciones en materia de prevención, seguridad, atención, sanción de delitos de alto impacto y violaciones de derechos humanos en contra de la ciudadanía, que permitan acercar a las víctimas a procesos más eficaces y eficientes; pero sobre contribuir a la recuperación de los proyectos de vida de miles de víctimas en el Estado de México.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea, la Iniciativa de Ley, para que de estimarla correcta se apruebe en sus términos.

**KARINA LABASTIDA SOTELO**

**DIPUTADA PRESENTANTE**

**GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA**

|  |  |
| --- | --- |
| **DIP. ADRIÁN MANUEL GALICIA SALCEDA** | **DIP. ALFREDO GONZÁLEZ GONZÁLEZ** |
| **DIP. ALICIA MERCADO MORENO** | **DIP. ANAÍS MIRIAM BURGOS HERNÁNDEZ** |
| **DIP. AZUCENA CISNEROS COSS** | **DIP. BEATRIZ GARCÍA VILLEGAS** |
| **DIP. BENIGNO MARTÍNEZ GARCÍA** | **DIP. BERENICE MEDRANO ROSAS** |
| **DIP. BRYAN ANDRÉS TINOCO RUIZ** | **DIP. CAMILO MURILLO ZAVALA** |
| **DIP. DIONICIO JORGE GARCÍA SÁNCHEZ** | **DIP. ELBA ALDANA DUARTE** |
| **DIP. EMILIANO AGUIRRE CRUZ** | **DIP. FAUSTINO DE LA CRUZ PÉREZ** |
| **DIP. GERARDO ULLOA PÉREZ** | **DIP. GUADALUPE MARIANA URIBE BERNAL** |
| **DIP. JUAN PABLO VILLAGÓMEZ SÁNCHEZ** | **DIP. JULIO ALFONSO HERNÁNDEZ RAMÍREZ** |
| **DIP. JULIETA VILLALPANDO RIQUELME** | **DIP. LILIANA GOLLAS TREJO** |
| **DIP. MARGARITO GONZÁLEZ MORAL** | **DIP. MARÍA DE JESÚS GALICIA RAMOS** |
| **DIP. MARÍA DEL ROSARIO ELIZALDE VÁZQUEZ** | **DIP. MARÍA ELIZABETH MILLÁN GARCÍA** |
| **DIP. MARIO GABRIEL GUTIÉRREZ CUREÑO** | **DIP. MAURILIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ** |
| **DIP. MAX AGUSTÍN CORREA HERNÁNDEZ** | **DIP. MÓNICA ANGÉLICA ÁLVAREZ NEMER** |
| **DIP. MONTSERRAT RUÍZ PÁEZ** | **DIP. NANCY NÁPOLES PACHECO** |
| **DIP. NAZARIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ** | **DIP. ROSA MARÍA PINEDA CAMPOS** |
| **DIP. ROSA MARÍA ZETINA GONZÁLEZ** | **DIP. TANECH SÁNCHEZ ÁNGELES** |
| **DIP. VALENTÍN GONZÁLEZ BAUTISTA** | **DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ** |
| **DIP. XÓCHITL FLORES JIMÉNEZ** |  |

**DECRETO NÚMERO**

**LA H. "LX" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO**

**DECRETA:**

**ARTÍCULO ÚNICO**: Se expide la **Ley de Víctimas del Estado de México**, para quedar de la manera siguiente:

**LEY DE VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MÉXICO**

**TÍTULO PRIMERO**

**DISPOSICIONES GENERALES**

**CAPÍTULO I**

**APLICACIÓN, OBJETO E INTERPRETACIÓN**

**Artículo 1.** La presente Ley es de orden público e interés social, así como de aplicación y observancia obligatoria en el Estado Libre y Soberano de México. Obliga, en sus respectivas competencias, a los poderes constitucionales y organismos autónomos del Estado de México, en los niveles estatal y municipal, en cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas y tiene por objeto:

1. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que el Estado Mexicano es Parte en la Ley General de Víctimas, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, los contemplados en esta ley y demás instrumentos de derechos humanos aplicables coordinando las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir su ejercicio efectivo;
2. Brindar la atención multidisciplinaria de las víctimas, priorizando los delitos establecidos en el artículo 19 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en todos aquellos delitos cometidos por razones de género, incluidos aquellos de violencia familiar que involucren niñas, niños y adolescentes;
3. Que en las situaciones donde exista una ponderación de derechos, en las que se encuentren protegidos los derechos de las víctimas, en todo caso se aplique aquella normatividad que les favorezca más, interpretando de forma extensiva bajo el principio de máxima protección, siempre y cuando derive de su condición de víctima del delito o de la vulneración a sus derechos humanos;
4. Establecer las obligaciones a cargo de las autoridades estatales y municipales, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquier institución pública o privada de velar por la protección de las víctimas y a proporcionar ayuda, asistencia y reparación integral;
5. Que el personal del servicio público competente asegure que se brinde atención inmediata a las víctimas, en especial en las materias de salud, educación, seguridad y desarrollo social, en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar conforme a la legislación aplicable;
6. Establecer los deberes, obligaciones y sanciones específicos de las víctimas, personal del servicio público, autoridades y de toda persona que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas;
7. Que la protección a las víctimas se garantice siempre y cuando el hecho victimizante se haya consumado, continuado o iniciado dentro del territorio del Estado de México; y
8. Regular el funcionamiento del Sistema Estatal de Atención a Víctimas del Estado de México.

**CAPÍTULO II**

**DEFINICIONES**

**Artículo 2.** Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

1. **Asesoras y Asesores Jurídicos:** A las personas profesionales del derecho que asesoran y representan a las víctimas pudiendo ser públicos o privados;
2. **Asesoría Jurídica:** Asesoría Jurídica Estatal de Atención a Víctimas;
3. **Asistencia:** Al conjunto de mecanismos, procedimientos, programas, medidas y recursos de orden político, económico, social, cultural, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política;
4. **Atención:** A la acción de dar información, orientación, asesoría y acompañamiento jurídico, psicosocial y de trabajo social de manera integral y multidisciplinaria a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, con miras a facilitar su acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral con un enfoque de justicia transicional;
5. **Ayuda o Recursos de Ayuda:** Gastos de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación, con cargo al Fondo;
6. **Código Nacional:** Al Código Nacional de Procedimientos Penales;
7. **Código Penal:** Al Código Penal del Estado de México;
8. **Comisión:** A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México;
9. **Comisión Ejecutiva:** A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México;
10. **Comité Multidisciplinario:** Al Comité Multidisciplinario Evaluador;
11. **Consejo Ciudadano:** Al Consejo Ciudadano de Atención a Víctimas;
12. **Consejo Consultivo:** Al Consejo Consultivo de Atención a Víctimas;
13. **Constitución Federal:** A la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
14. **Constitución Estatal:** A la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México;
15. **Daño:** Afectaciones materiales o inmateriales, sobre la vida, salud física y mental, moralidad, propiedad, pérdida de ingresos, educación, memoria, entorno social, y proyecto de vida, como resultado del hecho victimizante;
16. **Daño colectivo:** Afectaciones materiales o inmateriales, sobre el entorno, la memoria, los recursos naturales, las vías de comunicación y los derechos humanos de goce comunitario;
17. **Daño potencial:** Afectaciones materiales o inmateriales que aún no ocurren, pero que se mantienen latentes dada la situación particular de la persona que pueden requerir medidas de protección y acciones preventivas;
18. **Delito:** Acto u omisión que sancionan las leyes penales;
19. **DIFEM:** Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México;
20. **Fiscalía:** A la Fiscalía General de Justicia del Estado de México;
21. **Fondo:** Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral;
22. **Fondo Federal:** Fondo Federal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral;
23. **Formato Único de Registro:** Documento donde consta el relato de hechos de la víctima;
24. **Hecho victimizante:** Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Estos pueden estar tipificados como delitos o constituir una violación a los derechos humanos;
25. **Ley General:** Ley General de Víctimas;
26. **Ley:** a la Ley de Víctimas del Estado de México;
27. **Medidas de Compensación o Compensación:** Medidas otorgadas por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente tasables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos ocurrida con motivo de un hecho victimizante y de conformidad con los requisitos establecidos en la presente Ley y en las disposiciones legales aplicables que deban ser erogadas en favor de la víctima;
28. **Medidas de No Repetición:** Medidas que buscan que el delito o la violación de derechos humanos no vuelvan a ocurrir;
29. **Medidas de Rehabilitación:** Medidas que buscan facilitar a las víctimas, hacer frente a los efectos sufridos por causa del delito o de las violaciones de derechos humanos;
30. **Medidas de Restitución:** Medidas que buscan colocar a la víctima fuera de la condición de vulnerabilidad que la situó el delito o la violación de derechos humanos;
31. **Medidas de Satisfacción:** Medidas que buscan reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas, mediante la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, salvaguardando la memoria, protección, participación e integridad de la víctima, testigos o personas que hayan intervenido;
32. **Plan:** Plan Estatal Integral de Atención a Víctimas;
33. **Programa:** Programa Estatal de Atención Integral a Víctimas;
34. **Procedimiento:** Procedimientos seguidos ante autoridades judiciales o administrativas;
35. **Registro:** Registro Estatal de Víctimas;
36. **Reglamento:** Reglamento de la Ley de Víctimas del Estado de México;
37. **Reparación Integral del Daño:** las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.
38. **Secretaría:** a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos;
39. **Sistema:** Sistema Estatal de Atención a Víctimas;
40. **Sistemas municipales:** A los sistemas municipales para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México;
41. **Tratados internacionales:** A los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Federal;
42. **Violación de derechos humanos:** Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, en los Tratados Internacionales, la Constitución Local, leyes, reglamentos y demás instrumentos jurídicos aplicables cuando el agente sea persona del servicio público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o una persona particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por una persona particular instigada o autorizada, explícita o implícitamente por una persona del servicio público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de una persona del servicio público; y
43. **Victimización secundaria:** A la afectación producida por la respuesta negativa, omisa o contraria a derecho, del personal del servicio público en las instituciones que derivado del hecho victimizante atiendan a víctima.

**CAPÍTULO III**

**PRINCIPIOS**

**Artículo 3.** Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes:

**I. Dignidad:** es la condición que define al ser humano como un ente racional, individual y absoluto, debido a lo cual es sujeto de derechos. Por ello, es el fundamento de todos los derechos y la razón por la cual todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a reconocer la calidad de las personas como titulares y sujetos de derechos, y a respetar, considerar y tratar a cada persona como causa, esencia y fin de su actuación.

En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos;

**II. Buena fe:** las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Las personas del servicio público que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima y deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos;

**III. Complementariedad:** Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en esta Ley, en especial los relacionados con la asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a las víctimas, deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes.

Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas deben ser complementarias para alcanzar la integralidad que busca la reparación;

**IV. Debida diligencia:** El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derechos.

El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas reguladas por la presente Ley, realizar prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de sus derechos, contribuir a su recuperación como sujetos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes, así como evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se implementen en favor de las víctimas;

**V. Enfoque Interseccional**: es el enfoque que toma en consideración las diversas circunstancias individuales o colectivas que colocan a las personas ante distintas condiciones y esquemas de vulnerabilidad para entender los procesos y condiciones específicas a las que se enfrentan las personas en su realidad, conforme a la interacción de las distintas formas de discriminación que las colocan en condiciones de desventaja;

**VI. Enfoque Diferencial y Especializado:** conforme a este enfoque, las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, atenciones, garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno, entre otros. Toda garantía o mecanismo especial deberá fundarse en razones de este enfoque;

**VII. Enfoque de Igualdad y No Discriminación:** en el ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas y en todos los procedimientos a los que se refiere la presente Ley, las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, edad, identidad de género, orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas;

**VIII. Enfoque de Justicia Transicional:** se refiere al conjunto no cerrado de medidas de diversa índole, utilizadas cuando de manera generalizada o sistemática, se han cometido graves violaciones a los derechos humanos, para alcanzar uno o más propósitos relacionados entre sí, como, conocer la verdad, reparar el daño a las víctimas, reconciliar a la población, restaurar la paz y fortalecer el Estado de Derecho, recuperar la confianza en las instituciones gubernamentales, y muy especialmente, garantizar que las graves violaciones a derechos humanos no vuelvan a ocurrir, buscando la transitoriedad individual, social y comunitaria de los efectos del daño bajo los pilares de búsqueda de la verdad, acceso a la justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición;

**IX. Enfoque transformador:** las autoridades que deban aplicar la presente Ley realizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los esfuerzos necesarios encaminados a que las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes;

**X. Gratuidad:** Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite que implique el derecho de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, serán gratuitos para la víctima;

**XI. Integralidad, indivisibilidad e interdependencia**: todos los derechos contemplados en esta Ley se encuentran interrelacionados entre sí. No se puede garantizar el goce y ejercicio de estos sin que a la vez se garantice el resto de los derechos. La violación de un derecho pondrá en riesgo el ejercicio de otros.

Para garantizar la integralidad, la asistencia, atención, ayuda y reparación integral a las víctimas se realizará de forma multidisciplinaria y especializada;

**XII. Interés superior de la niñez:** el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales;

**XIII. Máxima protección:** toda autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.

Las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas;

**XIV. Mínimo existencial:** constituye una garantía fundada en la dignidad humana como presupuesto del Estado democrático y consiste en la obligación del Estado de proporcionar a la víctima y a su núcleo familiar un lugar en el que se les preste la atención adecuada para que superen su condición y se asegure su subsistencia con la debida dignidad que debe ser reconocida a las personas en cada momento de su existencia;

**XV. No criminalización:** Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie.

Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse;

**XVI. Perspectiva de Género:** es una herramienta teórico-metodológica que permite observar desigualdades e inequidades existentes al identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión originada por la identidad de género, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género;

**XVII. Presunción de Inocencia:** Para proteger el proceso de reparación y resiliencia de la víctima, el esclarecimiento de los hechos en la búsqueda de la verdad, evitar que impune y que los daños causados por el delito sean reparados, toda persona debe ser tratada como inocente, mientras no se pruebe la culpabilidad en juicio mediante una sentencia y se evitará equiparar a la persona imputada con la culpable en anticipación de la pena. Lo anterior, no obstará para que se ejecute lo establecido en esta ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables. Este principio, debe interpretarse íntimamente con los de no criminalización y buena fe;

**XVIII. Resiliencia:** en el proceso que lleva a la reparación integral del daño, se deberá procurar que la víctima a través de su experiencia logre tomar acciones de manera paulatina para poder generar transformaciones positivas en su autoconcepción, en su vida, en su realidad y en su entorno, para que llegue a establecer vínculos y relaciones interpersonales adecuadas, que le permitan crear o recuperar un proyecto de vida.

Además, se deberá buscar que la víctima genere un proceso que fomente el ejercicio de su capacidad para construir conductas positivas a pesar de la experiencia difícil y que tenga una vida sana que busque el crecimiento personal y el mejoramiento de condiciones de vida individual, familiar y ambiental;

**XIX. Solidaridad:** se entiende como la obligación de colaboración y ayuda mutua que requieren tener las víctimas entre sí, entre el personal e instituciones del servicio público y entre las víctimas y el personal que las atiende;

**XX. Subsidiariedad:** se entiende como la obligación del Estado de brindar una protección especial, reforzada adecuada, transitoria, continua y efectiva de proteger los derechos de las víctimas y repararlas integralmente, según las necesidades particulares de cada una, por su responsabilidad directa o indirecta en el caso de la comisión del hecho victimizante dado que, en primera instancia, no le pudieron ser garantizados ni reparados adecuada o efectivamente por otros medios, con el objetivo de aportar las condiciones a la víctima de recuperar su proyecto de vida con relación al principio de resiliencia.

En la ejecución de este principio, se buscará en todo momento la participación social pública, privada y comunitaria que sea necesaria para cumplir con la reparación integral;

**XXI. Participación conjunta:** para superar la vulnerabilidad de las víctimas, el Estado deberá implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral con el apoyo y colaboración de la sociedad civil y el sector privado, incluidos los grupos o colectivos de víctimas;

**XXII. Progresividad y no regresividad:** las autoridades que deben aplicar la presente Ley tendrán la obligación de realizar todas las acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la misma y no podrán retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados;

**XXIII. Publicidad:** todas las acciones, mecanismos y procedimientos deberán ser públicos, siempre que esto no vulnere los derechos humanos de las víctimas o las garantías para su protección.

El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar información y orientación a las víctimas acerca de los derechos, garantías y recursos, así como acciones, mecanismos y procedimientos con los que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y publicitarse de forma clara y accesible;

**XXIV. Rendición de cuentas:** el personal del servicio público encargado de la implementación de la Ley, así como de los planes y programas que esta Ley regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación que contemplen la participación de la sociedad civil, particularmente de víctimas y colectivos de víctimas;

**XXV. Transparencia:** Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que lleve a cabo el Estado en ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas, deberán instrumentarse de manera que garanticen el acceso a la información, así como el seguimiento y control correspondientes.

Las autoridades deberán contar con mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación de las políticas, planes y programas que se instrumenten para garantizar los derechos de las víctimas; y

**XXVI. Trato preferente:** El personal de todas las instituciones del Estado de México deberá garantizar a las víctimas un trato digno y preferente con empatía, tacto, paciencia y amabilidad, en especial los servicios de salud y educación.

**TÍTULO SEGUNDO**

**DE LAS VÍCTIMAS**

**CAPÍTULO I**

**DE LA CALIDAD DE VÍCTIMA**

**Artículo 4.** Para efectos de esta ley, se considerarán como víctimas:

1. **Víctimas directas:** aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, sexual o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, en la Ley General, en la Constitución Estatal, en esta Ley y en todos los demás instrumentos jurídicos aplicables;
2. **Víctimas indirectas:** los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella o que por su cercanía o actuar hayan resultado comprobablemente afectadas por el hecho victimizante;
3. **Víctimas potenciales:** las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por presenciar la comisión del hecho victimizante, prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito.

Para determinar que una persona es una víctima potencial, se deberá tomar en cuenta el relato del hecho victimizante de la persona, el daño potencial y los requisitos que sean necesarios para el otorgamiento de medidas de protección;

1. **Víctimas colectivas:** los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sufrido daño colectivo, habiendo sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos humanos.

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la Ley General y la Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene a la persona responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo.

Cuando por motivo del delito muera la víctima directa, se harán los estudios y valoraciones pertinentes para determinar la prevalencia del otorgamiento de la reparación integral del daño a las víctimas indirectas en los términos del Reglamento.

**Artículo 5.** El reconocimiento de la calidad de víctima, para efectos de esta Ley, se realiza por las determinaciones de cualquiera de las siguientes autoridades:

1. El juzgador penal, mediante sentencia ejecutoriada;
2. El juzgador penal que tiene conocimiento de la causa;
3. El juzgador materia de amparo, penal, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que el sujeto es víctima;
4. La Comisión;
5. Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que el Estado Mexicano les reconozcan competencia;
6. La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter;
7. La Comisión Ejecutiva, en los términos del reglamento; y
8. El Ministerio Público.

**Artículo 6.** El reconocimiento de la calidad de víctima tendrá como efecto:

1. El acceso a los derechos, garantías, acciones, mecanismos y procedimientos, en los términos de esta Ley y las disposiciones reglamentarias;
2. El acceso a los recursos del Fondo y a la reparación integral de conformidad con lo previsto en la presente Ley y en las disposiciones legales aplicables; y
3. En el caso de lesiones graves, delitos contra la libertad psicosexual, violencia familiar, trata de personas, secuestro, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición, privación de la libertad y todos aquellos que impidan a la víctima por la naturaleza del daño atender adecuadamente la defensa de sus derechos; que el juez de la causa o la autoridad responsable del procedimiento, de inmediato, suspendan todos los juicios y procedimientos administrativos y detengan los plazos de prescripción y caducidad, así como todos los efectos que de éstos se deriven, en tanto su condición física y/o mental no sea superada, siempre que se justifique la imposibilidad de la víctima de ejercer adecuadamente sus derechos en dichos juicios y procedimientos.

**CAPÍTULO II**

**DE LOS DERECHOS AL TRATO DIGNO Y JUSTO**

**Artículo 7.** Las víctimas gozarán, de manera enunciativa, de los siguientes derechos al trato digno y justo:

1. A recibir un trato digno, comprensivo y respetuoso por parte de las personas del servicio público de las instituciones responsables del cumplimiento de esta Ley, así como por parte de los particulares que cuenten con convenios para brindar servicios a las víctimas desde el primer momento en que tengan intervención,
2. A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos;
3. A no sufrir victimización secundaria ni ser nuevamente traumatizadas o criminalizadas por el personal del servicio público;}
4. A que se adopten medidas en los procedimientos judiciales y administrativos para minimizar las molestias causadas, de manera proporcional, siempre que ello no impida su proceso o la efectividad de las medidas y atenciones, para lo cual, se llevarán a cabo las acciones necesarias con la gradualidad que requiera el caso;
5. A que las políticas públicas implementadas con base en la presente Ley tengan un enfoque transversal de género y diferencial, considerando, entre otras, las diferencias culturales, religiosas, de credo, étnicas, particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores, personas con discapacidad física o mental, temporal o permanente, la población indígena y las personas en situación de desplazamiento interno;
6. A que se dé seguimiento a los tratamientos, expedientes y trámites de medidas de protección, ayuda, asistencia y atención, que como consecuencia del delito o de la violación a los derechos humanos, que sean necesarios para la recuperación y garantizar la integridad física y psíquica de la víctima; y
7. A obtener copia simple o certificada gratuita y de manera expedita de los trámites o diligencias en las que intervengan en los términos de las legislaciones procesales vigentes.

**CAPÍTULO III**

**DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA**

**Artículo 8.** Las víctimas gozarán de los siguientes derechos de acceso a la justicia:

1. A acceder a mecanismos judiciales adecuados y efectivos, ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garanticen el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que las personas autoras de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciadas y sancionadas; y a que se determine, en su caso, una reparación integral por los daños sufridos;
2. Al acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga el Estado, incluidos los procedimientos judiciales y administrativos. La legislación en la materia que regule su intervención en los diferentes procedimientos deberá facilitar su participación;
3. A que los procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, gratuitos y accesibles, según lo dispuesto en la legislación aplicable, para que puedan acceder a una pronta reparación del daño;
4. A ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus derechos por la autoridad competente, con total independencia de que exista o no un probable responsable de los hechos;
5. A que cuando la información sea provista por el Ministerio Público de acuerdo con la fracción anterior, éste deje constancia en la carpeta de investigación;
6. A que los procedimientos judiciales y administrativos respondan a sus necesidades;
7. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño producido por el hecho victimizante;
8. A ser informadas sobre su papel y del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como la decisión de sus causas, especialmente cuando se trate de delitos graves;
9. A que se les explique el alcance y trascendencia de los exámenes periciales a los que podrán someterse dependiendo de la naturaleza del caso, y de aceptar el que se lleven a cabo a ser acompañadas en todo momento por personal de la Comisión Ejecutiva;

La Comisión Ejecutiva, podrá cubrir los costos de los exámenes a que se refiere el párrafo anterior, con cargo al Fondo Estatal, según corresponda;

Sólo se podrán contratar para este efecto servicios de peritos internacionales, cuando no se cuente con personal nacional lo suficientemente capacitado en la materia;

1. A tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o mecanismos alternativos;
2. A recibir asesoramiento y representación jurídica. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado a solicitud de la víctima;
3. A ser informadas de sus derechos como víctimas;
4. A ser informadas del desarrollo del procedimiento penal;
5. A intervenir en el procedimiento penal como parte plena, siendo sujetos procesales del mismo, ejerciendo en él sus derechos, en términos de la legislación aplicable, que en ningún caso podrán ser menores a los del imputado;

Si no se apersonaran en el mismo, serán representadas por una Asesora o Asesor Jurídico o en su caso por el Ministerio Público, y serán notificadas personalmente de todos los actos y resoluciones que pongan fin al proceso, de los recursos interpuestos ya sean ordinarios o extraordinarios, así como de las modificaciones en las medidas cautelares que se hayan adoptado por la existencia de un riesgo para su seguridad, vida o integridad física o modificaciones a la sentencia;

1. A que se les otorguen todas las facilidades para la presentación de denuncias o querellas;
2. A presentar todas las pruebas que estimen pertinentes relacionadas con el hecho victimizante;
3. A coadyuvar con el Ministerio Público; para que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso y a que se desahoguen las diligencias correspondientes;
4. A que las autoridades respectivas inicien, de inmediato, de manera eficaz y urgente, tan pronto como se haga de su conocimiento, todas las diligencias a su alcance para determinar el paradero de las personas desaparecidas. Esto incluye la instrumentación de mecanismos y protocolos de búsqueda conforme a la legislación aplicable y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte;
5. A solicitar, acceder y recibir en forma clara y precisa toda la información necesaria para ejercer sus derechos, cumplir con sus obligaciones, acceder a los servicios y conocer del desarrollo del procedimiento penal, relacionados con su calidad de víctimas;
6. A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de acceso a los procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen en la presente Ley;
7. A conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga un interés como interviniente;
8. A contar con información para ponerse en contacto con grupos de defensa y tratamiento que les pudieran ayudar;
9. A que durante el procedimiento penal no sea objeto de conductas consideradas delictivas o que vulneren su integridad o derechos;
10. A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, con independencia de que se haya reparado o no el daño;
11. A poder acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la responsabilidad en la comisión del delito o de la violación de los derechos humanos;
12. A optar por la solución de conflictos conforme a las reglas de la justicia alternativa, a través de instituciones como la conciliación, la mediación, el arbitraje, la justicia restaurativa, o prácticas autóctonas a fin de facilitar la reparación del daño y la reconciliación de las partes y la garantía de no repetición en los casos en que lo permita la legislación aplicable.

No podrá llevarse la conciliación ni la mediación a menos de que quede acreditado a través de los medios idóneos, que la víctima está en condiciones de tomar esa decisión.

El Ministerio Público llevará un registro y una auditoría sobre los casos en que la víctima haya optado por alguna de las vías de solución alterna de conflictos, notificando en todo caso a las instancias de protección a la mujer a fin de que se cercioren que la víctima tuvo la asesoría requerida para la toma de dicha decisión.

Se sancionará a las personas del servicio público que conduzcan a las víctimas a tomar estas decisiones sin que éstas estén conscientes de las consecuencias que conlleva;

1. A ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos;
2. A que se les informe sobre la realización de las audiencias donde se vaya a resolver sobre sus derechos y a estar presentes en las mismas;
3. A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos y a impugnar dicha resolución;
4. A que el consulado de su país de origen sea inmediatamente notificado conforme a las normas internacionales que protegen el derecho a la asistencia consular, cuando se trate de víctimas extranjeras;
5. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua o idioma, en caso de que no hable el idioma español, o tenga dificultad o discapacidad auditiva, verbal, visual o cognitiva en cualquier etapa del proceso, además, en su caso, de hacer los ajustes razonables definidos en el Código Nacional. En el caso de ser integrantes de pueblos y comunidades indígenas, de oficio se les nombrará un intérprete, a fin de que puedan expresarse en su propia lengua;
6. A contar al menos con versiones traducidas en las lenguas indígenas del Estado de México de la ley y sus normas reglamentarias;
7. A solicitar la intervención de expertos independientes, a fin de que asesore a las autoridades competentes sobre la investigación de los hechos y la realización de peritajes en los casos que impliquen violaciones a los derechos humanos que haya sido determinada por un órgano facultado;
8. A la reunificación familiar cuando por razón del tipo de hecho victimizante su núcleo familiar se haya dividido; y
9. A conocer si figura en los archivos estatales y, en ese caso, después de ejercer su derecho de consulta. Para casos de personas fallecidas, este derecho podrá ser ejercido por sus familiares hasta el tercer grado, siempre y cuando no sean presuntamente relacionados con la comisión del daño;

**Artículo 9.** Las organizaciones de la sociedad civil o grupos de víctimas podrán solicitar también que grupos de expertos independientes revisen, informen y lleven a cabo recomendaciones al Sistema Estatal para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas.

**CAPÍTULO IV**

**DE LOS DERECHOS A LA SEGURIDAD,**

**A LA PROTECCIÓN Y A LA CONFIDENCIALIDAD**

**Artículo 10.** La víctima gozará de los siguientes derechos a la seguridad, a la protección y a la confidencialidad:

1. A que se le garantice su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor, contra todo acto de intimidación y represalia, evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas;
2. A solicitar directamente o a través de las asesoras y asesores jurídicos o abogadas y abogados particulares, al Ministerio Público o al Juez de Control, que dicte de inmediato las medidas cautelares, de protección y providencias precautorias para proteger su vida, integridad física y psicológica, bienes, posesiones o derechos, salvaguardando, en todo caso, los derechos de defensa, según sea el caso, en los supuestos siguientes:

**a.** En los casos previstos en el artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal;

**b.** En los casos en que su vida, integridad o libertad sean amenazadas o se hallen en riesgo debido a su condición de víctima o del ejercicio de sus derechos con independencia de que se encuentren dentro de un procedimiento penal o de cualquier otra índole;

**c.** En los casos en que se ponga en riesgo la dignidad y privacidad de la víctima, incluyendo la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas;

**d.** En los casos de víctimas de los delitos de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la Ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de los intervinientes o colaboradores en un procedimiento penal, así como de las personas o familiares cercanas a todos ellos;

**e.** En los casos de delitos vinculados a la violencia de género;

**f.** En los casos en que las víctimas sean niñas, niños o adolescentes;

**g.** En los casos en que sus familiares hasta el tercer grado o personas demostrablemente en peligro por su cercanía con la víctima o por las circunstancias así lo requieran; y

**h.** En los casos en que los testigos, pudieran encontrarse en peligro.

En los casos establecidos en los incisos e y f, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Ministerio Público o la autoridad judicial, según corresponda, dictarán de oficio y de manera inmediata las medidas de protección necesarias para salvaguardar su seguridad e integridad física y psicológica, de acuerdo con su edad, grado de madurez, desarrollo o necesidades particulares, así como las providencias necesarias para su debido cumplimiento y ejecución, lo que no obstará para que las víctimas puedan solicitarlo por sí mismas;

1. A que la información tenga carácter confidencial;
2. A que se resguarde su identidad y otros datos personales cuando sean niñas, niños o adolescentes, cuando se trate de delitos de violación, secuestro, delincuencia organizada, trata de personas y cuando a juicio de la autoridad, sea necesario para proteger su vida e integridad física;
3. A ser protegida en su intimidad, en caso necesario;
4. A permanecer en un lugar donde no pueda ser visto por el imputado, cuando durante el proceso tuviere que participar en la diligencia de identificación o en alguna otra diligencia; y
5. A recibir alojamiento temporal y, en su momento, retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad, en casos de víctimas desplazadas por la violencia.

**CAPÍTULO V.**

**DE LOS DERECHOS A LA REPARACIÓN INTEGRAL,**

**A LA VERDAD Y LA MEMORIA**

**Artículo 11.** Las víctimas tendrán derecho a la verdad, a la memoria, a la justicia y a la reparación integral a través de políticas públicas, recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces.

**SECCIÓN A**

**DEL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL**

**Artículo 12.** Las víctimas gozarán de los siguientes derechos a la reparación integral:

1. A que la reparación integral del daño sea expedita, justa, proporcional, oportuna, adecuada, transformadora, plena, diferenciada, y efectiva respecto del daño que han sufrido como consecuencia del hecho victimizante, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y de no repetición, a través de la coordinación de las instancias gubernamentales implicadas.

En los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver al responsable de dicha reparación. Si la víctima o su Asesora o Asesor Jurídico no solicitaran la reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a hacerlo;

1. A que las personas responsables del daño, lo resarzan equitativamente a las víctimas, sus familiares o a las personas a su cargo, de manera primaria. El Estado otorgará la reparación de manera subsidiaria en caso de que se compruebe la imposibilidad de estos para hacerlo;
2. A obtener la devolución de los bienes o el pago por los daños o pérdidas sufridos, el reembolso de los gastos realizados por consecuencia del hecho victimizante, la prestación de servicios y la rehabilitación de derechos;
3. A que se aclaren los hechos, se establezca y reconozca la responsabilidad de las personas o del Estado ante las víctimas;
4. A contar con las medidas necesarias para impedir que se repitan estos actos;
5. A la restitución en sus derechos, así como en sus bienes y propiedades si hubieren sido despojadas de ellos;
6. A recibir indemnización financiera justa, proporcional y adecuada por parte del Estado, cuando no sea suficiente la indemnización procedente de la persona responsable del daño o de otras fuentes:

**a.** Cuando las víctimas de delitos hayan sufrido importantes lesiones corporales o menoscabo de su salud física o mental por consecuencia de delitos graves; o

**b.** Cuando las víctimas hayan muerto o hayan quedado física o mentalmente incapacitadas por consecuencia del hecho victimizante, procederá la indemnización a la familia, particularmente a las personas a cargo de la víctima antes de su deceso o como consecuencia de la incapacidad.

**Artículo 13.** La reparación integral será implementada en favor de la víctima teniendo en cuenta las circunstancias, las características, el contexto, la gravedad y magnitud del hecho victimizante, conforme a un criterio de proporcionalidad.

**Artículo 14.** La reparación integral será otorgada a partir de la resolución o determinación de un órgano local, nacional o internacional por el cual le sea reconocida su condición de víctima, comprendiendo las medidas de restitución, rehabilitación, compensación y satisfacción.

**Artículo 15.** Para la determinación material de la reparación integral, se tomarán en consideración, además, un cálculo cuantitativo y cualitativo a partir de casos análogos y de resoluciones, siempre y cuando por las circunstancias del caso resulte pertinente.

Para el cálculo del daño, según el caso, se podrán tomar en cuenta, entre otros, el lucro cesante, los costos incurridos por la víctima, el costo efectivo de las medidas de restablecimiento, el costo efectivo de las medidas de restitución, de las medidas preventivas, de las necesidades individualizadas, la similitud con casos anteriores y aquellos elementos que por la particularidad del caso resulten necesarias para una reparación integral.

Para el cálculo del daño colectivo, según el caso, se podrán tomar en cuenta, entre otros, los costos incurridos por la comunidad, el costo efectivo de las medidas de restablecimiento, de las medidas preventivas, de las necesidades comunitarias, la similitud con casos anteriores y aquellos elementos que por la particularidad del caso resulten necesarias para una reparación integral del daño.

**Artículo 16.** Para determinar la dimensión moral y simbólica del daño en la reparación integral, se tomará en consideración el contexto, la memoria, la dignificación y la participación de las víctimas.

**Artículo 17.** Cuando el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, deje de presentarse ante la autoridad jurisdiccional competente que conozca de su caso los días que se hubieran señalado para tal efecto u omita comunicar a la autoridad jurisdiccional competente los cambios de domicilio que tuviere o se ausentase del lugar del juicio de autorización de la autoridad jurisdiccional competente, esta última ordenará, sin demora alguna, que entregue la suma que garantiza la reparación del daño a la víctima, dejando constancia en el expediente del pago definitivo de la cantidad depositada, lo que no implica que se haya efectuado la reparación integral del daño correspondiente.

En los casos en que la garantía fuese hecha por hipoteca, fianza o prenda, la autoridad jurisdiccional competente remitirá dichos bienes a la autoridad fiscal correspondiente para su cobro, el cual deberá entregarse sin dilación a la víctima. En los mismos términos los fiadores están obligados a pagar en forma inmediata la reparación del daño, aplicándose para su cobro, en todo caso, el procedimiento económico coactivo que las leyes fiscales señalen.

**Artículo 18.** Las medidas de reparación integral podrán cubrirse con cargo al Fondo de acuerdo con lo establecido en la Ley, su reglamento y las Reglas de Operación del Fondo.

**SECCIÓN B**

**DEL DERECHO A LA VERDAD**

**Artículo 19.** Las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho de conocer los hechos constitutivos de delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, la identidad de las personas responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad.

**Artículo 20.** Las víctimas gozarán de los siguientes derechos:

1. A conocer la verdad, los resultados de las investigaciones y a recibir información específica sobre las violaciones de derechos o los delitos que las afectaron, incluidas las circunstancias en que ocurrieron los hechos y, en los casos de personas desaparecidas, ausentes, no localizadas, extraviadas o fallecidas, a conocer su destino o paradero o el de sus restos.
2. A solicitar la intervención de expertos independientes, en los casos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en la investigación de los hechos y la realización de peritajes.
3. A que los familiares de las víctimas estén presentes en las exhumaciones, por sí y/o a través de sus asesoras o asesores jurídicos; a ser informadas sobre los protocolos y procedimientos que serán aplicados; y a designar peritos independientes, acreditados ante organismo nacional o internacional de protección a los derechos humanos, que contribuyan al mejor desarrollo de estas.

**Artículo 21.** La Comisión Ejecutiva, podrá cubrir los gastos que se originen con motivo de la contratación de peritos y expertos independientes, nacionales o internacionales con cargo al Fondo.

**Artículo 22.** Una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas periciales y científicas a las que está obligado el Estado de acuerdo con esta Ley, el Código Nacional y la legislación aplicable, la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares, deberá hacerse respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales. Las autoridades competentes, a solicitud de los familiares, generarán los mecanismos necesarios para repatriar los restos de las víctimas ya identificados, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de esta Ley.

**Artículo 23.** En caso necesario, a efecto de garantizar las investigaciones, la autoridad deberá notificar a los familiares la obligación de no cremar los restos, hasta en tanto haya una sentencia ejecutoriada. Las autoridades ministeriales tampoco podrán autorizar ni procesar ninguna solicitud de gobierno extranjero para la cremación de cadáveres, identificados o sin identificar, hasta en tanto no haya sentencia ejecutoriada.

**Artículo 24.** Con independencia de los derechos previstos en esta Ley, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición de personas y el procedimiento para conocer y resolver de las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por desaparición se sujetarán a lo que dispongan las leyes en la materia, a fin de que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.

**Artículo 25.** Para garantizar el ejercicio pleno de este derecho de las víctimas, sus familiares y la sociedad, el Estado podrá generar mecanismos para la investigación independiente, imparcial y competente, que cumpla, entre otros, con los siguientes objetivos:

1. El esclarecimiento histórico preciso de las violaciones de derechos humanos, la dignificación de las víctimas y la recuperación de la memoria histórica;
2. La determinación de la responsabilidad individual o institucional de los hechos;
3. El debate sobre la historia oficial donde las víctimas de esas violaciones puedan ser reconocidas y escuchadas;
4. La contribución a la superación de la impunidad mediante la recomendación de formulación de políticas y
5. La recomendación de las reparaciones, reformas institucionales y otras políticas necesarias para superar las condiciones que facilitaron o permitieron las violaciones de derechos.

Para el cumplimiento de estos objetivos, deberán realizarse consultas que incluyan la participación y la opinión de las víctimas, grupos de víctimas y de sus familiares.

**Artículo 26.** La investigación deberá garantizar los derechos de las víctimas y de los testigos, asegurándose su presencia y declaración voluntarias. Se deberá garantizar la confidencialidad de las víctimas y los testigos cuando ésta sea una medida necesaria para proteger su dignidad e integridad y adoptará las medidas necesarias para garantizar su seguridad. Asimismo, en los casos de las personas que se vean afectadas por una acusación, deberá proporcionarles la oportunidad de ser escuchadas y de confrontar o refutar las pruebas ofrecidas en su contra, ya sea de manera personal, por escrito o por medio de representantes designados.

**Artículo 27.** La investigación deberá seguir protocolos de actuación con el objetivo de garantizar que las declaraciones, conclusiones y pruebas recolectadas puedan ser utilizadas en procedimientos penales como pruebas con las debidas formalidades de ley.

**Artículo 28.** Las organizaciones de la sociedad civil, tales como asociaciones profesionales, colectivos de víctimas, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, podrán proporcionar a la autoridad competente, los resultados que arrojen sus investigaciones de violaciones a los derechos humanos, con el fin de contribuir con la búsqueda y conocimiento de la verdad. Las autoridades deberán dar las garantías necesarias para que esta actividad se pueda realizar de forma libre e independiente.

Asimismo, podrán solicitar que grupos de esos expertos revisen, informen y emitan recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas.

**Artículo 29.** Las autoridades están obligadas a la preservación de los archivos relativos a las violaciones de los derechos humanos, así como a respetar y garantizar el derecho de acceder a los mismos.

El Estado tiene el deber de garantizar la preservación de dichos archivos y de impedir su sustracción, destrucción, disimulación o falsificación, así como de permitir su consulta pública, particularmente en interés de las víctimas y sus familiares con el fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.

Cuando la consulta de los archivos persiga favorecer la investigación histórica, las formalidades de autorización tendrán por única finalidad salvaguardar la integridad y la seguridad de las víctimas y de otras personas y, en ningún caso, podrán aplicarse las formalidades de autorización con fines de censura.

Los tribunales nacionales e internacionales, los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, así como las personas investigadoras que trabajen esta responsabilidad, podrán consultar libremente los archivos relativos a las violaciones de los derechos humanos. Este acceso será garantizado cumpliendo los requisitos pertinentes para proteger la vida privada, incluidos en particular las seguridades de confidencialidad proporcionadas a las víctimas y a otros testigos como condición previa de su testimonio.

En estos casos, no se podrá denegar la consulta de los archivos por razones de seguridad excepto que, en circunstancias excepcionales, la restricción se encuentre previamente establecida en la ley, la autoridad haya demostrado que la restricción es necesaria en una sociedad democrática para proteger un interés de seguridad estatal o nacional legítimo y que la denegación sea objeto de revisión por la autoridad competente, a la vez que puede ser sujeta a examen judicial independiente.

**Artículo 30.** Toda persona tendrá derecho a saber si sus datos personales se encuentran en los archivos estatales y, en ese caso, después de ejercer su derecho de consulta, a impugnar la legitimidad de las informaciones y contenidos que le conciernan ejerciendo el derecho que corresponda. La autoridad garantizará que el documento modificado después de la impugnación incluya una referencia clara a las informaciones y contenidos del documento cuya validez se impugna y ambos se entregarán juntos cuando se solicite el primero. Para casos de personas fallecidas, este derecho podrá ser ejercido por sus familiares considerando las relaciones de parentesco que establece el Código Civil del Estado de México.

**SECCIÓN C. DEL DERECHO A LA MEMORIA**

**Artículo 31.** Las víctimas tienen derecho a la memoria. Este derecho es inseparable de su dignidad, del reconocimiento de sus derechos e intereses legítimos y del derecho de estas a la verdad. El derecho a la memoria está orientado a denunciar el hecho ilícito del hecho victimizante honrar y preservar la memoria de las víctimas para las generaciones presentes y venideras. En el marco del derecho a la memoria, el Estado de México adoptará todas las medidas tendentes a preservar la memoria de las víctimas e impedirán todo acto de cualquier naturaleza que sea, que atente contra la misma o constituya una ofensa o un menosprecio a las mismas.

**CAPÍTULO VI**

**DE LOS DERECHOS DE AYUDA, ASISTENCIA Y ATENCIÓN**

**Artículo 32.** Las víctimas tienen los siguientes derechos de ayuda, asistencia y atención:

1. A que se le otorguen con cargo a los Recursos de Ayuda del Fondo, medidas de ayuda provisional, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que requiera la víctima para garantizar que supere las condiciones de necesidad que tengan relación directa con el hecho victimizante;
2. A recibir ayuda provisional, oportuna, rápida, gratuita y efectiva de los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva, de acuerdo con las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos humanos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos humanos, durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata;
3. A recibir atención y ser canalizados para que les sea otorgado el tratamiento necesario y el total restablecimiento físico, psicológico y emocional, directo e inmediato, producto del daño producido por el hecho victimizante;
4. A solicitar los servicios de atención biopsicosocial y de trabajo social;
5. A otorgar libremente su consentimiento antes de recibir cualquier tipo de atención, de ser entrevistada o examinada. Tratándose de menores de edad o incapaces, la autorización podrá ser otorgada por persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. En caso de que no exista una persona que ejerza esos derechos, se hará mediante el consentimiento de una institución pública de asistencia familiar o de derechos humanos;
6. A recibir la asistencia material, médica, psicológica y social que sea necesaria, desde el primer momento, por conducto de los medios gubernamentales, voluntarios, comunitarios y autóctonos, como consecuencia del delito o de la violación a los derechos humanos;
7. Derecho a que los exámenes médicos le sean realizados en privado, bajo control del personal médico experto, nunca en presencia de agentes de seguridad, de ministerio público, u otras personas del servicio público que no se encuentren facultadas para ello;
8. A que sea informada sobre la disponibilidad de servicios sanitarios y sociales y demás asistencia pertinente, y se facilitará el acceso a ellos;
9. A recibir ayuda, asistencia y atención y en su caso, ser canalizada en forma oportuna, rápida, equitativa, directa, inmediata, gratuita y efectiva, con el seguimiento y gestiones pertinentes, por personal especializado para que les sea otorgado el tratamiento especializado necesario y el total restablecimiento físico, psicológico, emocional y social, producto del hecho victimizante;
10. A recibir en los casos que procedan, la ayuda provisional y humanitaria;
11. A gestionar el pago o reembolso de los gastos de transporte, alojamiento o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio si la víctima reside en municipio o Estado distinto al del enjuiciamiento, en caso de necesidad;
12. Al desarrollo social, la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación;
13. A que se generen políticas públicas de asistencia y acompañamiento para que las víctimas tengan oportunidades de empleo, educación y capacitación;
14. A recibir becas completas de estudio en instituciones públicas, como mínimo hasta la educación superior para sí o los dependientes que lo requieran;
15. De acceder de manera subsidiaria, ágil, eficaz y transparente a los Recursos del Fondo, previo acuerdo de la Comisión Ejecutiva; sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones, administrativas, penales y civiles que resulten al imputado, en los términos de esta ley;
16. A recibir, ayuda provisional de los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva;
17. A que, según el tipo y el caso específico, las atenciones, puedan llevarse a cabo por medios tecnológicos;
18. A solicitar a la Comisión Ejecutiva el traslado al lugar en donde la víctima se encuentre, para que rinda su entrevista, sea interrogada o participe en el acto para el cual fue citada, cuando por su edad, enfermedad grave o por alguna otra imposibilidad física o psicológica se dificulte su comparecencia, a cuyo fin deberá requerir la dispensa, con anticipación;
19. A ser notificada de las resoluciones relativas a las solicitudes de ingreso al Registro y de medidas de ayuda, de asistencia y reparación integral que se dicten; y
20. A requerir que las medidas materia de esta Ley le sean proporcionadas por una institución distinta a aquélla o aquéllas que hayan estado involucradas en el hecho victimizante, ya sea de carácter público o privado, a fin de evitar un nuevo proceso de victimización.

**CAPÍTULO VII**

**DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN**

**Artículo 33.** Las víctimas contarán con los siguientes derechos de participación:

1. Acudir y a participar en escenarios de diálogo institucional;
2. A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral;
3. A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales públicos para proteger y garantizar sus derechos;
4. A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le permita relacionarse con otras víctimas;
5. A expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades e instancias correspondientes y a que éstas, en su caso, sean consideradas en las decisiones que afecten sus intereses;
6. A colaborar con las investigaciones y las medidas para lograr superar su condición de vulnerabilidad, atendiendo al contexto, siempre y cuando las medidas no impliquen un detrimento a sus derechos; y
7. A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los diferentes mecanismos previstos en los ordenamientos legales en los cuales se les permitirá expresar sus opiniones y preocupaciones cuando sus intereses sean afectados. Las víctimas deberán decidir libremente su participación y tener la información suficiente sobre las implicaciones de cada uno de estos mecanismos.

**CAPÍTULO VIII**

**DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS COLECTIVAS**

**Artículo 34.** Las víctimas colectivas, son titulares de los siguientes derechos:

1. Los establecidos en el Título Segundo, Capítulos II, V, VII y X;
2. A la reparación y restitución del daño colectivo respecto de los derechos que les hubieran sido afectados;
3. A que las medidas colectivas sean implementadas tendiendo al reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados;
4. A la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural;
5. Al resarcimiento que comprenderá, en la medida de lo posible, la rehabilitación del medio ambiente;
6. A la recuperación biopsicosocial de las poblaciones y grupos afectados, cuando sea aplicable;
7. A la reconstrucción de la infraestructura y a la reposición de las instalaciones comunitarias;
8. Al reembolso de los gastos de reubicación cuando esos daños causen el desplazamiento de una comunidad;
9. A ser resarcidas por el Estado o gobierno en funciones o sucesor, cuando el personal del servicio público o sus agentes hayan sido responsables de los daños causados;
10. A la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados; y
11. A trabajar y coordinarse con otras víctimas para la defensa de sus derechos, incluida su reincorporación a la sociedad.

**Artículo 35.** La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados.

**Artículo 36.** Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados.

**Artículo 37.** El enfoque de la restitución de reparación colectiva estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados.

**Artículo 38.** Las medidas de reparación colectiva podrán cubrirse con cargo al Fondo, de acuerdo con lo establecido en esta Ley, su reglamento y las Reglas de Operación del Fondo.

**CAPÍTULO IX**

**DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS POTENCIALES**

Artículo 39. Las víctimas potenciales gozaran de los derechos establecidos en el Título Segundo, Capítulos II y IV.

**CAPÍTULO X**

**OTROS DERECHOS**

**Artículo 40.** Las víctimas contarán además de los derechos establecidos en esta ley y su reglamento, con los demás señalados en la Constitución, los Tratados Internacionales, la Ley General, la Constitución del Estado y cualquier otra disposición aplicable.

**CAPÍTULO XI**

**DE LAS OBLIGACIONES DE LA VÍCTIMA**

**Artículo 41.** A la víctima corresponde:

1. Actuar de buena fe;
2. Tratar de manera digna al personal del servicio público;
3. Cooperar con las autoridades que buscan el respeto de su derecho a la justicia y a la verdad, siempre que no implique un riesgo para su persona, familia o bienes jurídicos;
4. Conservar los bienes objeto de aseguramiento cuando éstos le hayan sido devueltos o puestos bajo su custodia, así como no cremar los cuerpos de familiares a ellos entregados, cuando la autoridad así se lo solicite, y por el lapso que se determine necesario;
5. Cuando tenga acceso a información reservada, respetar y guardar su confidencialidad; y
6. Cumplir con las directrices establecidas en los diferentes programas, políticas públicas y demás acciones emitidos e implementados por las instituciones del Gobierno del Estado de México en los procedimientos que tengan relación directa con su carácter víctima.

**Artículo 42.** La víctima deberá comparecer ante el órgano investigador, el juez o tribunal, organismo público de protección de los derechos humanos, o ante cualquiera otra autoridad o perito que requiera su presencia, para lo cual se considerará justificada para los efectos laborales y escolares, teniendo ella derecho a gozar del total de los derechos a que se refiere la Ley Federal del Trabajo.

**CAPÍTULO XII**

**CAUSAS DE RETIRO DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL**

**Artículo 43.** La atención brindada por las instituciones integrantes del Sistema, podrán ser suspendidas de manera temporal o retiradas de manera definitiva cuando:

**I.** Suspensión Temporal.

**a.** La víctima manifieste por escrito que no tiene interés en que se le siga prestando el servicio; o

**b.** Hayan transcurrido cuatro meses a partir de la fecha de la última atención comprobable brindada por la Comisión Ejecutiva o por cualquier institución del Gobierno del Estado de México derivada de su calidad de víctima, y sin causa justificada deje de asistir a los servicios otorgados.

**II.** Retiro definitivo.

**a.** La víctima o por interpósita persona, cometa actos de violencia física, verbal o sexual, amenazas o injurias, contra alguna persona del servicio público o alguna otra víctima;

**b.** La finalidad de la obtención del servicio sea obtener un lucro o actuar de mala fe;

**c.** Proporcione documentación falsa o alterada, debiendo informar a las autoridades respectivas, de acuerdo con lo establecido en el reglamento; o

**d.** Se presente bajo el influjo del alcohol o drogas.

En el caso de la fracción I se podrán restaurar los servicios a petición escrita expresa por parte de la víctima en todos los casos.

En el caso de la fracción II, inciso d, según la valoración del caso, podrá ser tratada a la víctima desde una perspectiva de salud, por única ocasión, suspendiendo temporalmente el servicio mientras acredite el cumplimiento de las medidas necesarias y comprobables para su tratamiento.

Lo establecido en este artículo será regulado en términos del reglamento de la Ley.

**TÍTULO TERCERO**

**DE LAS MEDIDAS DE AYUDA, ASISTENCIA, ATENCIÓN Y REPARACIÓN**

**Artículo 44.** Las medidas de ayuda, asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan a las medidas de reparación integral. Por lo tanto, el costo o las erogaciones en que incurra la autoridad en la prestación de los servicios de atención y asistencia, en ningún caso serán descontados de la compensación a que tuvieran derecho las víctimas.

**Artículo 45.** Las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención, rehabilitación se brindarán por las instituciones públicas del Estado y sus municipios en el ámbito de sus competencias, a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas.

**Artículo 46.** En casos urgentes, de extrema necesidad o aquellos en que las instituciones de carácter público no cuenten con la capacidad de brindar la atención que requiere, la Comisión Ejecutiva podrá autorizar que la víctima acuda a una institución de carácter privado con cargo al Fondo.

**CAPÍTULO I**

**MEDIDAS DE AYUDA INMEDIATA**

**Artículo 47.** La gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje que determinará prioridad en su asistencia, en la prestación de servicios y en la implementación de acciones dentro de las instituciones encargadas de brindarles atención y tratamiento.

Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno.

Las medidas de ayuda inmediata previstas en el presente Capítulo podrán cubrirse con cargo a los Recursos de Ayuda, según corresponda, en coordinación con las autoridades correspondientes en el ámbito de sus competencias.

**Artículo 48.** Las instituciones hospitalarias públicas del Estado y de los municipios tienen la obligación de dar atención de emergencia de manera inmediata a las víctimas que lo requieran, con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad y sin exigir condición previa para su admisión.

**Artículo 49.** Los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria consistirán en:

1. Hospitalización;
2. Material médico quirúrgico, incluidas prótesis y demás instrumentos, que la persona requiera para su movilidad, conforme al dictamen dado por el médico especialista en la materia;
3. Medicamentos;
4. Honorarios médicos, en caso de que el sistema de salud más accesible para la víctima no cuente con los servicios que ella requiere de manera inmediata;
5. Servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas;
6. Transporte y ambulancia;
7. Servicios de atención mental en los casos en que, como consecuencia de la comisión del delito o de la violación a sus derechos humanos, la persona quede gravemente afectada psicológica y/o psiquiátricamente;
8. Servicios odontológicos reconstructivos por los daños causados como consecuencia del delito o la violación a los derechos humanos;
9. Servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, con absoluto respeto de la voluntad de la víctima, y
10. La atención para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas.

En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada la víctima no cuente con lo señalado en las fracciones II, III y IV, los gastos hayan sido cubiertos por la víctima, el Estado o los municipios, según corresponda, los reembolsarán de manera completa e inmediata, de conformidad con lo que establezcan las normas reglamentarias aplicables.

**Artículo 50**. El Estado apoyará a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la víctima directa en todos los casos en los cuales la muerte sobrevenga como resultado del hecho victimizante. Estos gastos incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento se haya producido en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar. Por ningún motivo se prohibirá a las víctimas ver los restos de sus familiares, si es su deseo hacerlo. Si los familiares de las víctimas deben desplazarse del lugar en el que se encuentran hacia otro lugar para los trámites de reconocimiento, se deberán cubrir también sus gastos. El pago de los apoyos económicos aquí mencionados se gestionará conforme lo establezcan las normas reglamentarias correspondientes a los Recursos de Ayuda de la Comisión Ejecutiva.

**Artículo 51.** La Comisión Ejecutiva definirá y garantizará la creación de un Modelo de Atención Integral en Salud con enfoque biopsicosocial, de educación y asistencia social, el cual deberá contemplar los mecanismos de articulación y coordinación entre las diferentes autoridades obligadas e instituciones de asistencia pública que conforme al Reglamento de esta Ley presten los servicios subrogados a los que ella hace referencia. Este modelo deberá contemplar el servicio a aquellas personas que no sean beneficiarias de un sistema de prestación social o será complementario cuando los servicios especializados necesarios no puedan ser brindados por el sistema al cual pertenece.

**Artículo 52.** El Estado, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias serán las entidades obligadas a otorgar la credencial que identifique a las víctimas ante el sistema de salud, con el fin de garantizar la asistencia y atención urgentes para efectos reparadores.

El proceso de credencialización se realizará de manera gradual y progresiva dando prioridad a las víctimas de daños graves a la salud e integridad personal. No obstante, aquellas víctimas que no cuenten con credencial y requieran atención inmediata deberán ser atendidas de manera prioritaria.

**Artículo 53.** En materia de asistencia y atención médica, psicológica, psiquiátrica y odontológica, la víctima tendrá todos los derechos establecidos por la legislación aplicable para los Usuarios de los Servicios de Salud, y tendrá los siguientes derechos adicionales:

1. A que se proporcione gratuitamente atención médica y psicológica permanente de calidad en cualquiera de los hospitales públicos estatales y municipales, de acuerdo con su competencia, cuando se trate de lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes del delito o de la violación a los derechos humanos sufridos por ella. Estos servicios se brindarán de manera permanente, cuando así se requiera, y no serán negados, aunque la víctima haya recibido las medidas de ayuda que se establecen en la presente Ley, las cuales, si así lo determina el personal de la salud competente, se continuarán brindando hasta el final del tratamiento;
2. El Gobierno del Estado, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias deberán otorgar citas médicas en un periodo no mayor a ocho días naturales, a las víctimas que así lo soliciten, salvo que sean casos de atención de emergencia en salud, en cuyo caso la atención será inmediata;
3. Una vez realizada la valoración médica general o especializada, según sea el caso, y la correspondiente entrega de la formula médica, se hará la entrega inmediata de los medicamentos a los cuales la víctima tenga derecho y se canalizará con los especialistas necesarios para el tratamiento integral, si así hubiese lugar;
4. Se le proporcionará material médico quirúrgico, incluidas prótesis y demás instrumentos o aparatos que requiera para su movilidad conforme al dictamen dado por el personal de la salud especialista en la materia, así como los servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas y los servicios odontológicos que requiera por los daños causados como consecuencia del hecho victimizante;
5. Se le proporcionará atención en salud mental en los casos en que, como consecuencia del hecho victimizante, quede afectada psicológica y/o psiquiátricamente, durante el tiempo que sea necesario, y
6. La atención materno-infantil permanente cuando sea el caso incluyendo programas de nutrición, poniendo especial atención a niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad.

No podrá negarse la garantía de ejercer los derechos que protege este artículo a ninguna víctima que se encuentre fuera de su jurisdicción de derechohabientes.

**Artículo 54**. A toda víctima de violencia sexual, o cualquier otra conducta que afecte su integridad física o psicológica, se le garantizará el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima.

Asimismo, se le realizará práctica periódica de exámenes y tratamiento especializado, durante el tiempo necesario para su total recuperación y conforme al diagnóstico y tratamiento médico recomendado; en particular, se considerará prioritario para su tratamiento el seguimiento de eventuales contagios de enfermedades de transmisión sexual.

En caso de que decida tener al producto del embarazo, se le facilitarán todas las medidas aplicables proporcionadas por esta Comisión Ejecutiva y se le dará un seguimiento especial por parte de las Instituciones del Sistema, para el correcto desarrollo familiar.

También, en caso de querer hacerlo, se le facilitará darlo en adopción, en conjunto con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, de acuerdo con la legislación aplicable.

En cada una de las entidades públicas que brinden servicios, asistencia y atención a las víctimas, se dispondrá de personal capacitado en el tratamiento de la violencia sexual con un enfoque transversal de género.

**Artículo 55.** El Estado, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, definirán los procedimientos para garantizar de manera gratuita los servicios de asistencia médica preoperatoria, postoperatoria, quirúrgica, hospitalaria y odontológica a que hubiese lugar de acuerdo al concepto médico y valoración, que permita atender lesiones transitorias y permanentes y las demás afectaciones de la salud física y psicológica que tengan relación causal directa con las conductas.

**Artículo 56.** En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada la víctima no cumpla con lo señalado en los artículos anteriores y sus gastos hayan sido cubiertos por la víctima, la autoridad competente del orden de gobierno que corresponda se los reembolsará de manera completa y expedita, teniendo dichas autoridades, el derecho de repetir contra los responsables. Las normas reglamentarias aplicables establecerán el procedimiento necesario para solicitar el reembolso a que se refiere este artículo.

**CAPÍTULO II**

**MEDIDAS EN MATERIA DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN**

**Artículo 57.** El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia o su análogo, similar o correlativo en los municipios, y las instituciones de las que dependen las casas de refugio y acogida que existan y brinden estos servicios en el ámbito estatal, o municipal, contratarán servicios o brindarán directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad a las víctimas que se encuentren en especial condición de vulnerabilidad o que se encuentren amenazadas o en situación de desplazamiento de su lugar de residencia por causa del delito cometido contra ellas o de la violación de sus derechos humanos. El alojamiento y la alimentación se brindarán durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de emergencia, exista una solución duradera y pueda retornar libremente en condiciones seguras y dignas a su hogar.

**CAPÍTULO III**

**MEDIDAS EN MATERIA DE TRASLADO**

**Artículo 58.** Cuando la víctima se encuentre en un lugar distinto al de su lugar de residencia y desee regresar al mismo, las autoridades competentes de los diversos órdenes de gobierno pagarán los gastos correspondientes, garantizando, en todos los casos, que el medio de transporte usado por la víctima para su regreso es el más seguro y el que le cause menos trauma de acuerdo con sus condiciones.

**Artículo 59.** Las autoridades competentes del orden de gobierno que corresponda cubrirán los gastos relacionados con los apoyos de traslados de las víctimas, que comprenden los conceptos de transportación, hospedaje y alimentación, cuando la víctima tenga que trasladarse por las siguientes causas:

1. Formular denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su calidad procesal;
2. Desahogar diligencias o comparecer ante el Ministerio Público, sus autoridades auxiliares o bien para acudir ante las autoridades judiciales, la Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos u otra autoridad relacionada con los hechos victimizantes;
3. Solicitar a alguna institución nacional, estatal o municipal medidas de seguridad o protección de las autoridades competentes, cuando la víctima considere que existe un probable riesgo a su vida o integridad física o psicoemocional, y
4. Recibir atención especializada o de tratamiento por alguna institución nacional, estatal o municipal pública o privada cuando así sea autorizado en términos del Título Segundo, Capítulo VI de esta Ley, para el apoyo médico, psicológico o social que requiera.

En su caso, la Comisión Ejecutiva deberá reintegrar los gastos en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley General.

**CAPÍTULO IV**

**MEDIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN**

**Artículo 60**. Cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, debido al delito o la violación de derechos humanos sufrida, las autoridades estatales o municipales de acuerdo con sus competencias y capacidades, adoptarán con carácter inmediato, las medidas que sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño.

Las medidas de protección a las víctimas se deberán implementar con base en los siguientes principios:

1. Principio de protección: Considera primordial la protección de la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de las personas;
2. Principio de necesidad y proporcionalidad: Las medidas de protección deben responder al nivel de riesgo o peligro en que se encuentre la persona destinataria, y deben ser aplicadas en cuanto sean necesarias para garantizar su seguridad o reducir los riesgos existentes;
3. Principio de confidencialidad: Toda la información y actividad administrativa o jurisdiccional relacionada con el ámbito de protección de las personas, debe ser reservada para los fines de la investigación o del proceso respectivo; y
4. Principio de oportunidad y eficacia: Las medidas deben ser oportunas, específicas, adecuadas y eficientes para la protección de la víctima y deben ser otorgadas e implementadas a partir del momento y durante el tiempo que garanticen su objetivo.

Serán sancionadas administrativa, civil o penalmente, de conformidad con las leyes aplicables, el personal del servicio público estatal o municipal que contribuya a poner en riesgo la seguridad de las víctimas, ya sea a través de intimidación, represalias, amenazas directas, negligencia o cuando existan datos suficientes que demuestren que las víctimas podrían ser nuevamente afectadas por la colusión de dichas autoridades con los responsables de la comisión del delito o con un tercero implicado que amenace o dañe la integridad física o moral de una víctima.

**Artículo 61.** Las medidas adoptadas deberán ser acordes con la amenaza que tratan de conjurar y deberán tener en cuenta la condición de especial vulnerabilidad de las víctimas, así como respetar, en todos los casos, su dignidad.

**CAPÍTULO V**

**MEDIDAS EN MATERIA DE ASESORÍA JURÍDICA**

**Artículo 62.** El estado y los municipios brindarán de inmediato a las víctimas información y asesoría completa y clara sobre los recursos y procedimientos judiciales, administrativos o de otro tipo a los cuales ellas tienen derecho para la mejor defensa de sus intereses y satisfacción de sus necesidades, así como sobre el conjunto de derechos de los que son titulares en su condición de víctimas. La Comisión Ejecutiva garantizará lo dispuesto en el presente artículo a través de la Asesoría Jurídica, en los términos de la Ley.

**Artículo 63.** La información y asesoría deberán brindarse en forma gratuita y por profesionales conocedores de los derechos de las víctimas, garantizándoles a ellas siempre un trato respetuoso de su dignidad y el acceso efectivo al ejercicio pleno y tranquilo de todos sus derechos.

**CAPÍTULO VI**

**MEDIDAS DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN**

**SECCIÓN A**

**DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo 64.** La Comisión Ejecutiva como responsable de la creación y gestión del Registro garantizará que el acceso de las víctimas se haga de manera efectiva, rápida y diferencial con el fin de permitirles disfrutar de las medidas de asistencia y atención establecidas en la presente Ley.

**Artículo 65.** Conforme a los lineamientos desarrollados por la Comisión Ejecutiva, las secretarías, dependencias, organismos y entidades obligadas, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias y fundamentos legales de actuación, deberán tener en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios generales establecidos en la presente Ley y en particular el enfoque diferencial para los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno.

**Artículo 66.** Todas las medidas de asistencia, atención, protección o servicios otorgados por las instituciones del Estado y de los municipios a las víctimas por cualquier hecho, serán gratuitos y éstas recibirán un trato digno con independencia de su capacidad socio- económica y sin exigir condición previa para su admisión a éstos que las establecidas en la presente Ley.

**Artículo 67**. Las políticas y acciones tendrán por objeto asegurar el acceso de las víctimas a la educación y promover su permanencia en el sistema educativo si como consecuencia del delito o de la violación a derechos humanos se interrumpen los estudios, para lo cual se tomarán medidas para superar esta condición provocada por el hecho victimizante, particularmente niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, migrantes, indígenas y personas en situación de desplazamiento interno. La educación deberá contar con enfoque transversal de género y diferencial, de inclusión social y con perspectiva de derechos.

Se buscará garantizar la exención para las víctimas de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior

Para cumplir con lo establecido en el párrafo anterior, la Secretaría de Educación del Estado de México cubrirá los costos correspondientes con cargo a su presupuesto.

**Artículo 68.** Las instituciones del sistema educativo estatal impartirán educación de manera que permita a la víctima incorporarse con prontitud a la sociedad y, en su oportunidad, desarrollar una actividad productiva.

**Artículo 69.** Todas las autoridades educativas en el ámbito de sus competencias otorgarán apoyos especiales a las escuelas que, por la particular condición de la asistencia y atención a víctimas, enfrenten mayor posibilidad de atrasos o deserciones, debiendo promover las acciones necesarias para compensar los problemas educativos derivados de dicha condición.

**Artículo 70.** El Estado a través de sus organismos y de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, está obligado a prestar servicios educativos para que gratuitamente, cualquier víctima o sus hijas e hijos menores de edad, en igualdad efectiva de condiciones de acceso y permanencia en los servicios educativos que el resto de la población, pueda cursar la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.

**Artículo 71**. Las secretarías, dependencias, entidades y organismos de educación del Estado, así como aquellos municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias deberán entregar a los niños, niñas y adolescentes víctimas, los respectivos paquetes escolares y uniformes para garantizar las condiciones dignas y su permanencia en el sistema educativo.

**Artículo 72.** La víctima o sus hijas e hijos menores de edad deberán tener acceso a los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos complementarios que la Secretaría de Educación proporcione.

**Artículo 73.** El Estado, a través de sus secretarías, dependencias, entidades y organismos de educación y las instituciones de educación superior, establecerán los apoyos para que las víctimas participen en los procesos de selección, admisión y matrícula que les permitan acceder a los programas académicos ofrecidos por estas instituciones, para lo cual incluirán medidas de exención del pago de formulario de inscripción y de derechos de grado.

**SECCIÓN B**

**MEDIDAS ECONÓMICAS Y DE DESARROLLO**

**Artículo 74.** Dentro de la política de desarrollo social el Estado en sus distintos órdenes, tendrá la obligación de garantizar que toda víctima reciba los beneficios del desarrollo social conforme a sus necesidades, particularmente para atender a las víctimas que hayan sufrido daños graves como consecuencia del hecho victimizante.

**Artículo 75.** El Estado y los municipios en sus respectivos ámbitos, formularán y aplicarán políticas y programas de asistencia, que incluyan oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las víctimas destinando los recursos presupuéstales necesarios y estableciendo metas cuantificables para ello.

**Artículo 76**. Las autoridades competentes de los diversos órganos de gobierno están obligadas a proporcionar la información necesaria de dichos programas, sus reglas de acceso, operación, recursos y cobertura, sin que pueda por ningún motivo excluir de dichos programas a las víctimas.

**Artículo 77.** Las víctimas estarán sujetas a lo que determinen las leyes fiscales respectivas.

**SECCIÓN C**

**MEDIDAS DE ATENCIÓN Y ASISTENCIA EN MATERIA DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**

**Artículo 78.** Las medidas de atención y asistencia en materia de procuración y administración de justicia serán permanentes y comprenden, como mínimo:

1. La asistencia a la víctima durante cualquier procedimiento administrativo relacionado con su condición de víctima;
2. La asistencia a la víctima en el proceso penal durante la etapa de investigación;
3. La asistencia a la víctima durante el juicio; y
4. La asistencia a la víctima durante la etapa posterior al juicio.

Estas medidas se brindarán a la víctima con independencia de la representación legal y asesoría que dé a la víctima la Asesora o Asesor Jurídico.

**CAPÍTULO VII**

**MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL**

**SECCIÓN A. MEDIDAS DE RESTITUCIÓN**

**Artículo 79.** Las medidas de restitución comprenden, según corresponda:

1. Restablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición de persona;
2. Restablecimiento de los derechos jurídicos;
3. Restablecimiento de la identidad;
4. Restablecimiento de la vida y unidad familiar;
5. Restablecimiento de la ciudadanía y de los derechos políticos;
6. Regreso digno y seguro al lugar original de residencia u origen;
7. Reintegración en el empleo, y
8. Devolución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido incautados o recuperados por las autoridades incluyendo sus frutos y accesorios, y si no fuese posible, el pago de su valor actualizado. Si se trata de bienes fungibles, el juez podrá condenar a la entrega de un objeto igual al que fuese materia de delito sin necesidad de recurrir a prueba pericial.

En los casos en que una autoridad judicial competente revoque una sentencia condenatoria, se eliminarán los registros de los respectivos antecedentes penales.

**SECCIÓN B**

**MEDIDAS DE REHABILITACIÓN**

**Artículo 80.** Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y según proceda, las siguientes:

1. Atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas;
2. Servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas y a garantizar su disfrute pleno y tranquilo;
3. Servicios sociales orientados a garantizar el pleno restablecimiento de los derechos de la víctima en su condición de persona y ciudadana;
4. Programas de educación orientados a la capacitación y formación de las víctimas con el fin de garantizar su plena reintegración a la sociedad y la realización de su proyecto de vida;
5. Programas de capacitación laboral orientados a lograr la plena reintegración de la víctima a la sociedad y la realización de su proyecto de vida, y
6. Todas aquellas medidas tendientes a reintegrar a la víctima a la sociedad, incluido su grupo, o comunidad.

**Artículo 81.** Cuando se otorguen medidas de rehabilitación se dará un trato especial a los niños y niñas víctimas y a las hijas e hijos de las víctimas y a adultos mayores dependientes de éstas.

**SECCIÓN C**

**MEDIDAS DE COMPENSACIÓN**

**Artículo 82.** La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente tasables que sean consecuencia de la comisión de los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa o en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, daño o menoscabo al libre desarrollo de su personalidad o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo:

1. La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima;
2. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral, entendiendo por éste, aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados en términos monetarios. El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria;
3. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el pago de los salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión;
4. La pérdida de oportunidades, en particular las de educación y prestaciones sociales;
5. Los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a derechos humanos;
6. El pago de los gastos y costas judiciales de asesoría jurídica cuando sea privada, en caso de que la Comisión Ejecutiva se lo hubiere negado;
7. El pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como consecuencia del delito o de la violación a los derechos humanos, sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima, y
8. Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio o para asistir a su tratamiento, si la víctima reside en municipio o delegación distintos al del enjuiciamiento o donde recibe la atención.

Las normas reglamentarias aplicables establecerán el procedimiento y el monto de gasto comprobable mínimo.

La compensación subsidiaria a las víctimas de los delitos señalados en el primer párrafo consistirá en apoyo económico cuya cuantía tomará en cuenta la proporcionalidad del daño y los montos señalados en el artículo 85 de este ordenamiento.

En los casos de la fracción VIII, cuando se hayan cubierto con los Recursos de Ayuda, no se tomarán en consideración para la determinación de la compensación.

La Comisión Ejecutiva expedirá los lineamientos respectivos a efecto de que a la víctima no se le cause mayores cargas de comprobación.

**Artículo 83.** Todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos serán compensadas, en los términos y montos que determine la resolución que emita en su caso:

1. Un órgano jurisdiccional nacional;
2. Un órgano jurisdiccional internacional o reconocido por los Tratados Internacionales ratificados por México;
3. Un organismo público de protección de los derechos humanos; o
4. Un organismo internacional de protección de los derechos humanos reconocido por los Tratados Internacionales ratificados por México, cuando su resolución no sea susceptible de ser sometida a la consideración de un órgano jurisdiccional internacional previsto en el mismo tratado en el que se encuentre contemplado el organismo en cuestión.

Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que los mismos hechos pudieran implicar y conforme lo dispuesto por la presente Ley.

En los casos de víctimas de delitos se estará a lo dispuesto en los montos máximos previstos en el artículo 85.

**Artículo 84.** Cuando se trate de resoluciones judiciales que determinen la compensación a la víctima a cargo del sentenciado, la autoridad judicial ordenará la reparación con cargo al patrimonio de éste, o en su defecto, con cargo a los recursos que, en su caso, se obtengan de la liquidación de los bienes decomisados al sentenciado.

Sólo en caso de que no se actualicen los supuestos anteriores, se estará a lo dispuesto en el artículo siguiente.

**Artículo 85.** La Comisión Ejecutiva determinará el monto del pago de una compensación en forma subsidiaria a cargo del Fondo en términos de la presente Ley así como de las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta:

**a)** La determinación del Ministerio Público cuando la persona responsable se haya sustraído de la justicia, haya muerto o desaparecido o se haga valer un criterio de oportunidad;

**b)** La resolución firme emitida por la autoridad judicial;

La determinación de la Comisión Ejecutiva deberá dictarse dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de emitida la resolución correspondiente.

El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, será hasta de quinientas Unidades de Medida y Actualización mensuales, que ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima.

**Artículo 86.** La Comisión Ejecutiva compensará de forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa o en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, daño o menoscabo al libre desarrollo de su personalidad o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física o mental como consecuencia del delito, cuando así lo determine la autoridad judicial.

**Artículo 87**. La Comisión Ejecutiva ordenará la compensación subsidiaria cuando la víctima, que no haya sido reparada, exhiba ante ella todos los elementos a su alcance que lo demuestren y presente su solicitud. La víctima podrá presentar entre otros:

1. Las constancias del agente del ministerio público que competa de la que se desprenda que las circunstancias de hecho hacen imposible la consignación de la persona investigada por la probable comisión del daño ante la autoridad jurisdiccional y por lo tanto hacen imposible el ejercicio de la acción penal;
2. La sentencia firme de la autoridad judicial competente, en la que se señalen los conceptos a reparar, y la reparación obtenida de donde se desprendan los conceptos que el sentenciado no tuvo la capacidad de reparar;
3. La resolución emitida por autoridad competente u organismo público de protección de los derechos humanos de donde se desprenda que no ha obtenido la reparación del daño, de la persona directamente responsable de satisfacer dicha reparación.

**Artículo 88**. La compensación subsidiaria en favor de las víctimas de delitos se cubrirá con cargo al Fondo, según corresponda, en términos de esta Ley y su Reglamento.

**Artículo 89.** El Estado, a través de la Comisión Ejecutiva, tendrá la obligación de exigir que la persona sentenciada, restituya al Fondo los recursos erogados por concepto de la compensación subsidiaria otorgada a la víctima por el delito que aquél cometió.

**Artículo 90.** La obtención de la compensación subsidiaria no extingue el derecho de la víctima a exigir reparación de cualquier otra naturaleza.

**SECCIÓN D**

**MEDIDAS DE SATISFACCIÓN**

**Artículo 91**. Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y según corresponda:

1. La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o para impedir que se produzcan nuevos delitos o nuevas violaciones de derechos humanos;
2. La búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u osamentas de las personas asesinadas, así como la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;
3. Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;
4. Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas en el hecho punible o en la violación de los derechos, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;
5. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones de derechos humanos, y
6. La realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad y la humanidad de las víctimas, tanto vivas como muertas.

**SECCIÓN E**

**MEDIDAS DE NO REPETICIÓN**

**Artículo 92.** Las medidas de no repetición son aquéllas que se adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza. Estas consistirán en las siguientes:

1. El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles de las fuerzas armadas y de seguridad;
2. La garantía de que todos los procedimientos penales y administrativos se ajusten a las normas nacionales e internacionales relativas a la competencia, independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales y a las garantías del debido proceso;
3. El fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial;
4. La limitación en la participación en el gobierno y en las instituciones políticas de los dirigentes políticos que hayan planeado, instigado, ordenado o cometido graves violaciones de los derechos humanos;
5. La exclusión en la participación en el gobierno o en las fuerzas de seguridad de los militares, agentes de inteligencia y otro personal de seguridad declarados responsables de planear, instigar, ordenar o cometer graves violaciones de los derechos humanos;
6. La protección de los profesionales del derecho, la salud y la información;
7. La protección de las personas defensoras de los derechos humanos;
8. La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad;
9. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular los definidos en normas internacionales de derechos humanos y de protección a los derechos humanos, por las personas del servicio público, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios médicos, psicológicos y sociales, además del personal de empresas comerciales;
10. La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver por medios pacíficos los conflictos sociales;
11. La revisión y reforma de las leyes, normas, ordenamientos legales y políticas públicas que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las permitan; y
12. Todas aquellas que abonen a la reducción de la impunidad y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

**Artículo 93.** Se entienden como medidas que buscan garantizar la no repetición de los delitos ni de las violaciones a derechos humanos, las siguientes:

1. Supervisión de la autoridad;
2. Prohibición de ir a un lugar determinado u obligación de residir en él, en caso de existir peligro inminente para la víctima;
3. Caución de no ofender;
4. La asistencia a cursos de capacitación sobre derechos humanos; y
5. La asistencia a tratamiento de deshabituación o desintoxicación dictada por un juez y sólo en caso de que la adicción hubiera sido la causa del hecho victimizante.

**Artículo 94.** Se entiende por supervisión de la autoridad, la consistente en la observación y orientación de los sentenciados, ejercidas por personal especializado, con la finalidad de coadyuvar a la protección de la víctima y la comunidad.

Esta medida se establecerá cuando la privación de la libertad sea sustituida por otra sanción, sea reducida la pena privativa de libertad o se conceda la suspensión condicional de la pena.

**Artículo 95.** El juez en la sentencia exigirá una garantía de no ofender que se hará efectiva la persona acusada violase las disposiciones del artículo anterior, o de alguna forma reincidiera en los actos de molestia a la víctima. Esta garantía no deberá ser inferior a la de la multa aplicable y podrá ser otorgada en cualquiera de las formas autorizadas por las leyes.

**Artículo 96.** Cuando el sujeto haya sido sentenciado por delitos o violación a los derechos humanos cometidos bajo el influjo o debido al abuso de sustancias alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos o similares, independientemente de la pena que corresponda, sólo si el juez así lo ordena, se aplicarán cursos y tratamientos para evitar su reincidencia y fomentar su deshabituación o desintoxicación.

**TÍTULO CUARTO**

**DEL SISTEMA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS**

**CAPÍTULO I**

**OBJETO E INTEGRACIÓN**

**Artículo 97.** El Sistema Estatal es la instancia superior en el Estado, encargada de la formulación y coordinación de políticas públicas y tendrá por objeto la planeación, consolidación y supervisión de los planes, proyectos, programas, servicios y acciones institucionales e interinstitucionales que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en el ámbito estatal y municipal en coordinación con la federación y los sectores social y privado.

**Artículo 98.** El Sistema se integra por las personas titulares de las siguientes instituciones, las cuales serán encargadas de la aplicación de esta ley y el cumplimiento de su objeto en el ámbito de su competencia:

1. **Poder Ejecutivo**

**a.** La persona titular del Poder Ejecutivo, quien lo presidirá;

**b.** Secretaría de Justicia y Derechos Humanos;

**c.** Secretaría de Cultura;

**d.** Secretaría de Desarrollo Social;

**e.** Secretaría de Educación;

**f.** Secretaría de Finanzas;

**g.** Secretaría General de Gobierno;

**h.** Secretaría de Movilidad;

**i.** Secretaría de Salud;

**j.** Secretaría del Trabajo;

**k.** Secretaría de Cultura y Turismo;

**l.** Secretaría de la Mujer;

**m.** DIFEM;

**n.** Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México;

**o.** Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México;

**p.** Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas;

**q.** La Coordinación General de Estrategia e Imagen Institucional; y

**r.** Las demás que el Ejecutivo requiera dependiendo de la problemática que se atienda.

1. Poder Legislativo.

Tres diputados o diputadas presidentes o presidentas de Comisiones Legislativas, sin perjuicio de que sean especiales, relacionadas con la materia del Sistema.

1. Poder Judicial.

**a.** Consejo de la Judicatura del Estado de México.

1. Órganos Públicos Autónomos:

**a.** Comisión;

**b.** Universidad Autónoma del Estado de México; y

**c.** Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

1. Tres personas integrantes del Consejo Ciudadano, cada uno proveniente de colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y personas de la academia, los cuales serán elegidos de entre y por sus miembros, los cuales durarán un año en el encargo y tendrán derecho de voz, pero no de voto.
2. Dos personas de la academia, especializadas en materias afines, a convocatoria de la Comisión Ejecutiva, quienes tendrán derecho de voz, pero no de voto y no podrán formar parte del Consejo Ciudadano;
3. Dos personas de la sociedad civil o del sector privado a convocatoria de la Comisión Ejecutiva, quienes tendrán derecho de voz, pero no de voto y no podrán formar parte del Consejo Ciudadano;
4. Un municipio representante de cada una de las regiones del Estado de México que al efecto se establezcan en el reglamento de la Ley;
5. Las demás que sean necesarias, con derecho de voz, pero no de voto, a invitación del Sistema.

Para la operación del Sistema y el cumplimiento de sus atribuciones, el Sistema contará con una Comisión Ejecutiva que conocerá y resolverá los asuntos de su competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables.

**Artículo 99.** Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema tendrá las siguientes atribuciones:

1. Promover la coordinación y colaboración con las instituciones, entidades públicas, sociales y privadas federales, estatales, del Gobierno de la Ciudad de México y municipales, organismos autónomos encargados de la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas;
2. Formular propuestas a la Comisión Ejecutiva para la elaboración del Programa Estatal de Atención Integral a Víctimas y demás instrumentos programáticos relacionados con la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas;
3. Analizar y evaluar los resultados que arrojen las evaluaciones que se realicen a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas;
4. Elaborar propuestas de reformas en materia de atención a víctimas y presentarlas al Congreso del Estado a través de los integrantes del Sistema del Poder Legislativo;
5. Integrar los comités que sean necesarios para el desempeño de sus funciones;
6. Fijar criterios uniformes para la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, capacitación, profesionalización, evaluación, reconocimiento, certificación y registro del personal de las instituciones de atención a víctimas, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables;
7. Promover una estrategia de supervisión y acompañamiento que busca el desarrollo profesional y la especialización conjunta de los miembros de las instituciones de atención a víctimas y otras entidades relacionadas;
8. Promover que las legislaciones aplicables prevean un procedimiento ágil, eficaz y uniforme para la imposición de sanciones administrativas al personal de las instituciones de atención a víctimas, por incumplimiento de los deberes previstos en esta Ley y demás que se establezcan en los ordenamientos correspondientes;
9. Impulsar la participación de la comunidad en las actividades de atención a víctimas;
10. Fijar criterios de cooperación y coordinación para la atención médica, psicológica y jurídica de las víctimas, así como de gestoría de trabajo social respecto de estas;
11. Fomentar la cultura de respeto a las víctimas y a sus derechos;
12. Formular estrategias de coordinación en materia de combate a la corrupción, a la impunidad, a la ineficacia e ineficiencia con relación a la atención a víctimas;
13. Proponer programas de cooperación internacional, nacional, regional, estatal e intermunicipal en materia de prevención y atención a víctimas;
14. Aprobar los Planes Municipales de Atención a Víctimas;
15. Establecer lineamientos y protocolos para el desahogo de procedimientos de atención a víctimas;
16. Expedir sus reglas de organización y funcionamiento;
17. Promover la uniformidad de criterios jurídicos;
18. Promover la celebración de convenios de coordinación entre la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas de la Federación y de otras entidades federativas;
19. Recabar información estadística sobre víctimas asistidas por sus integrantes, derivado del hecho victimizante. Tal información tendrá carácter público y en ningún caso incluirá datos personales.
20. Las demás a las que estén sujetos conforme a esta Ley, su reglamento y otras disposiciones aplicables.

**Artículo 100.** Todos los municipios del Estado deberán coadyuvar en todo aquello que les sea requerido por el Sistema y por la Comisión Ejecutiva, en el ámbito de su competencia sobre lo relacionado con las víctimas. Además, deberán llevar a cabo planes municipales regionales de atención y prevención, bajo la asesoría, coordinación y la comunicación facilitada por la Comisión Ejecutiva, los cuales serán presentados por los municipios representantes en el pleno, el cual los valorará para su aprobación.

**Artículo 101.** Los integrantes del Sistema se reunirán en Pleno o en comisiones las cuales se deberán crear de conformidad con lo establecido en el Reglamento.

El Pleno se reunirá por lo menos una vez al año a convocatoria de la Secretaría, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar y en forma extraordinaria, cuando alguna situación urgente así lo requiera. Los integrantes tienen obligación de comparecer a las sesiones personalmente.

El quórum para las reuniones del Sistema se conformará con la mitad más uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes con derecho de voto.

La Presidencia del Sistema podrá ser suplida por la persona titular de la Secretaría.

Tendrán el carácter de invitados a las sesiones del Sistema o de las comisiones previstas en esta Ley, las instituciones u organizaciones privadas o sociales, los colectivos o grupos de víctimas, que por acuerdo del Titular de la Comisión Ejecutiva deban participar en la sesión que corresponda.

El Reglamento establecerá el mecanismo de invitación correspondiente. Los invitados acudirán a las reuniones con derecho a voz, pero sin voto.

**CAPÍTULO II**

**DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL ESTADO DE MÉXICO**

**Artículo 102.** La Comisión Ejecutiva es un órgano desconcentrado de la Secretaría, con autonomía técnica y de gestión, cuyo objeto es establecer, operar y gestionar la política pública en materia de atención a víctimas en el Estado de México, para lo cual contará como mínimo con las unidades multidisciplinarias de atención para víctimas que deberán contemplar al menos las de Asesoría Jurídica, Atención Biopsicosocial y de Trabajo Social, el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, el Registro Estatal de Víctimas, una Unidad Especializada en Violaciones de Derechos Humanos, un Centro Estatal de Memoria Verdad y Justicia, un Comité Multidisciplinario Evaluador, un Consejo Ciudadano y un Consejo Consultivo además de las que sean necesarias en los términos del Reglamento o del Reglamento Interno, según corresponda.

**Artículo 103.** La Comisión Ejecutiva tendrá las facultades siguientes:

1. Proponer al Sistema una política estatal integral y políticas públicas de prevención de delitos y violaciones a derechos humanos, así como de atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y reparación integral a las víctimas, en especial aquellos delitos vinculados a la violencia de género de acuerdo con los principios establecidos en esta Ley;
2. Establecer unidades de atención victimal en los municipios, así como contar con las áreas, personal y presupuesto que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto, conforme a su operación y disponibilidad presupuestaria;
3. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones adoptadas por el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y el Sistema;
4. Garantizar el acceso a los servicios integrales en materia de atención a víctimas, referidos en la presente Ley;
5. Elaborar y ejecutar los planes, programas, protocolos y demás instrumentos programáticos necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos en esta Ley;
6. Solicitar a las autoridades de todos los niveles de Gobierno y de los Poderes del Estados y Órganos Autónomos la información que se requiera para la atención a las víctimas;
7. Elaborar el Programa Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de México con el objeto de crear, reorientar, dirigir, planear, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas públicas en materia de atención a víctimas;
8. Proponer a los municipios un modelo de Plan Anual Municipal de Atención a Víctimas, el cual podrá ser adecuado, modificado y adicionado por los municipios para su aprobación por el Sistema;
9. Formular políticas, mecanismos y estrategias de atención integral a víctimas vinculados a la violencia de género;
10. Generar diagnósticos específicos sobre las necesidades de los municipios en materia de capacitación, recursos humanos y materiales que se requieran para garantizar un estándar mínimo de atención digna a las víctimas;
11. Proponer, promover y en su caso ejecutar mecanismos para la capacitación, formación, sensibilización, y especialización del personal del servicio público estatal, municipal, de los órganos autónomos y de los poderes legislativo y judicial;
12. Promover y ejecutar las medidas de coordinación interinstitucional con las dependencias, instituciones y órganos que integran el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y el Sistema, así como con las demás entidades federativas;
13. Establecer programas integrales emergentes de ayuda, atención, asistencia, protección, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación subsidiaria, en casos de violaciones graves a derechos humanos o delitos graves cometidos contra un grupo de víctimas;
14. Promover la obtención de recursos, aportaciones y donaciones de personas físicas, y personas morales públicas o privadas;
15. Crear comités técnicos especializados necesarios para el desempeño de sus funciones;
16. Proponer políticas públicas de prevención de delitos y violaciones de derechos humanos, así como de asistencia, atención y reparación integral de las víctimas;
17. Crear campañas de promoción y difusión de los derechos de las víctimas y de los derechos humanos en general;
18. Hacer recomendaciones a las instituciones integrantes del Sistema, las cuales deberán ser respondidas dentro de los siguientes 30 días hábiles, en los términos del Reglamento;
19. Expedir sus reglas de organización y funcionamiento interno;
20. Celebrar convenios de coordinación o colaboración con el propósito de dar cumplimiento al objeto de esta Ley;
21. Recabar y actualizar la información de los bancos de datos relacionados con su objeto;
22. Vigilar en coordinación con la Secretaría de Seguridad, la actualización de los bancos de datos y registros relacionados con su objeto por parte de su personal, de las instituciones del Estado de México y sus Municipios y apercibirlas en caso de incumplimiento;
23. Asegurar la participación de las víctimas tanto en las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sentencias internacionales en materia de derechos humanos dictadas en contra del Estado Mexicano, como en aquellas acciones que permitan garantizar el cumplimiento de recomendaciones de organismos internacionales, nacionales y locales de derechos humanos en coordinación con las instituciones pertinentes;
24. Contratar servicios periciales y servicios periciales independientes para el cumplimiento de sus funciones;
25. Las demás necesarias para el cumplimiento de su objeto y aquellas establecidas en otras disposiciones jurídicas.

**Artículo 104.** El patrimonio de la Comisión Ejecutiva se integra:

1. Con los recursos que le asigne el Congreso del Estado a través del Presupuesto de Egresos;
2. Los bienes muebles e inmuebles que le sean asignados, y
3. Los demás ingresos, rendimientos, bienes, derechos y obligaciones que adquiera o se le adjudiquen por cualquier título jurídico.

**Artículo 105.** La Comisión Ejecutiva promoverá el derecho de las víctimas a colaborar, participar y ser representadas de manera activa en las instituciones del Sistema, con el fin de fomentar su intervención en la construcción de políticas públicas sobre la atención a víctimas, prevención de delitos y violaciones a derechos humanos.

**Artículo 106.** La Comisión Ejecutiva contará con un órgano externo de opinión y asesoría de las acciones, políticas públicas, programas y proyectos que desarrolle denominado Consejo Ciudadano.

El Consejo Ciudadano, podrá proponer acciones y recomendaciones al Sistema Estatal para lograr la justicia y la verdad para las víctimas.

El Consejo Ciudadano estará integrado por nueve representantes, integrados en partes iguales por colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y personas de la academia, quienes serán electos por la Legislatura y cuyo cargo tendrá carácter honorífico.

Para efectos del párrafo anterior, la Legislatura emitirá una convocatoria pública, que establecerá los criterios de selección, la cual deberá ser publicada en el Periódico Oficial, Gaceta del Gobierno.

Las bases de la convocatoria pública deben ser emitidas por el poder Legislativo, cuando menos, a criterios de experiencia estatal, regional, nacional o internacional en trabajos de protección, atención, asistencia, justicia, verdad y reparación integral de víctimas; desempeño destacado en actividades profesionales, de servicio público, sociedad civil o académicas, así como experiencia laboral, académica o de conocimientos especializados, en materias afines a la Ley.

La elección de los miembros del Consejo Ciudadano deberá garantizar el respeto a los principios que dan marco a esta Ley, especialmente los de paridad y enfoque diferencial.

Las funciones del Consejo Ciudadano estarán previstas en el Reglamento de la Ley, las personas integrantes durarán en su cargo tres años, los cuales serán escalonados.

**Artículo 107.** La Comisión Ejecutiva contará con un órgano externo denominado Consejo Consultivo encargado de observar y validar el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva, la administración y operación del Fondo y la aprobación del Programa de Atención Integral a Víctimas el cual se integrará de la siguiente forma:

1. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, quien fungirá como Presidente;
2. La Comisión Ejecutiva, quien fungirá como Secretaría Técnica;
3. La Secretaría de la Contraloría;
4. Los vocales siguientes:

**a.** La Secretaría General de Gobierno;

**b.** La Secretaría de Finanzas;

**c.** La Fiscalía General de Justicia del Estado de México;

**d.** Dos organizaciones de la sociedad civil, especializadas en derechos humanos como invitados, las cuales cambiarán anualmente.

Los integrantes del Consejo Consultivo tendrán derecho de voz y voto, con excepción de la Secretaría Técnica y de la Secretaría de la Contraloría quienes únicamente tendrán derecho de voz.

Los integrantes del Consejo Consultivo podrán nombrar a una persona suplente quien deberá tener el nivel jerárquico inmediato inferior, con excepción de la Secretaría Técnica.

Los cargos de los integrantes del Consejo Consultivo tendrán carácter honorífico.

La organización y funcionamiento del Consejo Consultivo se establecerá en el Reglamento de la presente Ley.

**Artículo 108.** La Comisión Ejecutiva contará con un Comité Multidisciplinario con las siguientes facultades:

1. Elaborar los proyectos de dictamen de acceso a los recursos del Fondo para el otorgamiento de los Recursos de Ayuda;
2. Elaborar los proyectos de dictamen de reparación integral y, en su caso, la compensación, previstas en la Ley y el Reglamento;
3. Elaborar los proyectos de dictamen para la creación de fondos de emergencia, y
4. Las demás establecidas en la Ley y el Reglamento.

**Artículo 109**. La Comisión Ejecutiva, será administrada y representada por una persona titular que será nombrada y removida por la persona titular del Ejecutivo del Estado.

**Artículo 110.** Para ser titular de la Comisión Ejecutiva se requiere:

1. Tener la ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de sus derechos;
2. Contar con título profesional o posgrado en derecho o en alguna materia afín;
3. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil, o académicas relacionadas con la materia de esta Ley por al menos 5 años;
4. No haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político dentro de los dos años previos a su designación; y
5. No haber resultado culpable por delito doloso.

**Artículo 111.** La persona titular de la Comisión Ejecutiva tendrá las siguientes facultades:

1. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones adoptadas por el Sistema;
2. Administrar, representar legalmente, suscribir convenios y dirigir el cumplimiento de las atribuciones de la Comisión Ejecutiva;
3. Nombrar y remover al personal de la Comisión Ejecutiva;
4. Proponer y dictar los lineamientos, mecanismos, instrumentos e indicadores para el seguimiento, evaluación y vigilancia de las funciones de la Comisión Ejecutiva;
5. Dar a conocer a los integrantes del Sistema, los programas, acuerdos y demás actividades llevadas a cabo para el cumplimiento de los objetivos y obligaciones establecidas en la presente Ley al menos una vez al año;
6. Garantizar el derecho de inscripción de las víctimas en el Registro, así como los servicios de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral que soliciten, a través de las instancias competentes;
7. Proponer y aprobar los programas operativos y presupuestales anuales que correspondan a la Comisión Ejecutiva;
8. Solicitar el debido cumplimiento de las medidas de reparación integral a cargo de las autoridades responsables;
9. Coordinar los trabajos de elaboración de la propuesta de dictámenes que darán soporte a la reparación integral del daño;
10. Someter a consideración del Consejo Consultivo, los dictámenes de reparación y compensación emitidos por el Comité Multidisciplinario;
11. Supervisar el funcionamiento y administración del Fondo;
12. Someter a consideración del Consejo Consultivo la aprobación del ejercicio de recursos del Fondo para el cumplimiento de su objeto, siempre que se justifique debidamente su utilidad, hasta por el 5%;
13. Garantizar la óptima utilización de los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la Comisión Ejecutiva, para el cumplimiento de sus objetivos conforme a los principios de eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción;
14. Dirigir y coordinar los programas y estrategias para la difusión de los servicios que presta la Comisión Ejecutiva;
15. Supervisar la observancia del código de ética; y
16. Las demás que se requieran para el eficaz cumplimiento de las funciones de la Comisión Ejecutiva.

**TÍTULO QUINTO**

**DE LA ATENCIÓN INTEGRAL**

**CAPÍTULO I**

**DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo 112.** Para garantizar la ejecución del modelo de atención integral para las víctimas, la Comisión Ejecutiva, contará con las áreas de atención multidisciplinaria integradas al menos por las Direcciones Generales de Asesoría Jurídica, Atención Biopsicosocial, Trabajo Social, Derechos Humanos, Centro Estatal de Memoria y del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como el área encargada del Registro Estatal de Víctimas.

**Artículo 113.** Todo el personal de la Comisión Ejecutiva, desde el primer momento en que tenga contacto con la víctima, en el ejercicio de sus funciones y conforme al ámbito de su competencia, tendrá los siguientes deberes:

1. Identificarse oficialmente ante la víctima, detallando nombre y cargo que detentan;
2. Desarrollar con la debida diligencia las atribuciones cumpliendo con los principios establecidos en la presente Ley;
3. Garantizar que se respeten y apliquen las normas e instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos;
4. Tratar a la víctima con humanidad y respeto a su dignidad y sus derechos humanos;
5. Proporcionar y gestionar los servicios pertinentes a las víctimas.
6. En caso de ser necesario, canalizar a las víctimas a las instituciones que sean necesarias, a efecto de que se les preste la atención especializada y profesional que requieran;
7. Brindar atención especial a las víctimas para que los procedimientos administrativos y jurídicos destinados a la administración de justicia y conceder una reparación no generen un nuevo daño, violación, o amenaza a la seguridad y los intereses de la víctima, familiares, testigos o personas que hayan intervenido para ayudar a la víctima o impedir nuevas violaciones;
8. Evitar todo trato o conducta que implique victimización secundaria, retraumatización o incriminación de la víctima;
9. Brindar a la víctima orientación e información clara, precisa y accesible sobre sus derechos, garantías y recursos, así como sobre los mecanismos, acciones y procedimientos que se establecen o reconocen en la presente Ley;
10. Entregar en forma oportuna, rápida y efectiva, todos los documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos;
11. No obstaculizar ni condicionar el acceso de la víctima a la justicia y la verdad, así como a los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos por esta Ley;
12. Presentar ante el Ministerio Público, o en su caso, ante los organismos públicos de derechos humanos, las denuncias y quejas que en cumplimiento de esta Ley reciban. Dicha presentación oficial deberá hacerse dentro de los tres días hábiles contados a partir de que la víctima, o su representante, formuló o entregó la misma;
13. Ingresar a la víctima al Registro Estatal de Víctimas, cuando así lo imponga su competencia;
14. Aportar a la autoridad correspondiente los documentos, indicios o pruebas que obren en su poder, cuando éstos le sean requeridos o se relacionen con la denuncia, queja o solicitud que la víctima haya presentado en los términos de la presente Ley;
15. Investigar o verificar los hechos denunciados o revelados, procurando no vulnerar más los derechos de las víctimas;
16. Garantizar que la víctima tenga un ejercicio libre de todo derecho y garantía, así como de mecanismos, procedimientos y acciones contempladas en esta Ley;
17. Adoptar o solicitar a la autoridad competente, de forma inmediata y específica, las medidas necesarias para lograr que cese la violación de derechos humanos denunciada o evidenciada;
18. Permitir el acceso a lugares, documentos, expedientes, conceder entrevistas y demás solicitudes que les requieran los tribunales o los organismos públicos de defensa de los derechos humanos, cuando éstas sean realizadas en el ámbito de su competencia y con el objeto de investigar presuntas violaciones a derechos humanos;
19. Solicitar a cualquier autoridad o particular, la información necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones;
20. Proporcionar a la víctima de forma clara, accesible, oportuna y detallada la información y la asesoría que requiera;
21. Guardar el secreto profesional en el desempeño de sus funciones;
22. Observar el Código de Ética que se emita;
23. Acompañar a la víctima cuando asista al desahogo de una diligencia cuando así se requiera para la conservación de su integridad y testificar en caso de ser necesario;
24. Informar, asesorar y dar seguimiento a la víctima, respecto al sentido y alcance de las medidas de protección, ayuda, asistencia, atención y reparación integral, que sean necesarias para garantizar la integridad física y psíquica de las víctimas, así como su plena recuperación; y en su caso, tramitarlas ante las autoridades judiciales y administrativas;
25. Brindar el acompañamiento necesario a la víctima;
26. Abstenerse de solicitar o recibir por parte de las víctimas o sus representantes, gratificaciones monetarias o en especie, dádivas, favores o ventajas de cualquier índole;
27. Dar vista a la autoridad ministerial sobre la comisión de cualquier hecho que pudiera constituir la comisión de un delito o violación de derechos, siempre que éste se persiga de oficio. La vista en ningún caso condicionará, limitará o suspenderá la ayuda o servicios a los que la víctima tenga derecho; y
28. Las demás establecidas en el reglamento o en las demás disposiciones legales aplicables.

**Artículo 114.** El personal al cual sea designado algún asunto deberá dar aviso inmediato a su superior jerárquico a fin de ser sustituidos cuando:

1. Tengan parentesco sin limitación de grado o relación de amistad con el imputado;
2. Hayan presentado por sí, o su cónyuge o parientes, querella o denuncia en contra de la víctima, o imputado;
3. Tengan una relación sentimental, afectiva o contractual previa con la víctima, o imputado;
4. Sean o hayan sido tutores, curadores o administradores de los bienes de la víctima o contraparte, o sus herederos, legatarios, donatarios o fiadores; o
5. Se presenten reiteradas muestras de desconfianza de parte de la víctima, o reciba de su parte ofensas que afecten la objetividad en la atención.

**Artículo 115.** Si existe un impedimento para que el personal de atención integral no pueda aceptar la designación y no lo hace del conocimiento inmediato de su superior jerárquico, este le aplicará la medida disciplinaria correspondiente y lo sustituirá por otra persona en el conocimiento de la causa o expediente de que se trate, independientemente de la responsabilidad en que pudiera incurrir.

**Artículo 116.** Todo particular que ejerza funciones públicas en virtud de mecanismos de concesión, permiso, contratación o cualquier otro medio idóneo, estará sujeto a los deberes antes detallados, con los alcances y limitaciones del ámbito de su competencia. Las obligaciones regirán desde el primer momento en que tenga contacto con la víctima.

**CAPÍTULO II**

**DE LA ASESORÍA JURÍDICA**

**Artículo 117.** La Asesoría Jurídica es el área de la Comisión Ejecutiva, la cual tiene como finalidad brindar el servicio de asesoría y patrocinio jurídico a las víctimas, en los procedimientos ante la autoridad judicial que sean de su competencia en términos de esta Ley y tiene a su cargo las siguientes funciones:

1. Coordinar el servicio de Asesoría Jurídica para Víctimas a fin de garantizar los derechos de las víctimas contenidos en esta Ley, en tratados internacionales y demás disposiciones aplicables;
2. Asistir a las víctimas, otorgándoles acompañamiento y patrocinio en Materia Penal; brindándoles patrocinio en materia familiar, cuando esta, se derive de un hecho delictuoso y sea solicitado por una autoridad Judicial, administrativa o a petición de la misma víctima;
3. Canalizar el servicio de representación y asesoría jurídica de las víctimas en materia civil, laboral, familiar, administrativa, amparo y de derechos humanos a fin de garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y la reparación integral con las instituciones correspondientes, para que reciban la atención especializada en cada materia, cuando sea derivado del hecho victimizante, en los términos del reglamento;
4. Brindar asesoría a las víctimas por violaciones a Derechos Humanos, canalizándolas de manera inmediata a la Comisión de Derechos Humanos correspondiente;
5. Tutelar los intereses procesales de las víctimas;
6. Informar a las víctimas sobre el estado procesal de sus carpetas de investigación, averiguaciones previas o expedientes judiciales;
7. Llevar un registro de control de los servicios proporcionados en el ámbito de su competencia;
8. Controlar y promover la capacitación, actualización y especialización del personal del área;
9. Designar por cada Agencia del Ministerio Público, Juzgados y Tribunales que conozcan de materia penal y Visitaduría de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México, cuando menos a una Asesora o Asesor Jurídico de las Víctimas y al personal de auxilio necesario; y
10. Las demás que se requieran para la defensa de los derechos de las víctimas.

**Artículo 118.** La Comisión Ejecutiva le proporcionará a la víctima una Asesora o Asesor Jurídico en caso de que no quiera o no pueda contratar, o continuar con los servicios de un abogado particular.

La víctima tendrá el derecho de que su asesora o asesor jurídico comparezca a todos los actos en los que ésta sea requerida.

**Artículo 119.** La Asesoría Jurídica, estará integrada por asesoras y asesores jurídicos de atención a víctimas, peritos y profesionistas técnicos de diversas disciplinas que se requieran para la defensa de los derechos de las víctimas.

**Artículo 120.** La Asesoría Jurídica contará con un servicio profesional de carrera el cual comprenderá al menos la selección, ingreso, adscripción, permanencia, promoción, capacitación, prestaciones, estímulos y sanciones de acuerdo con las disposiciones reglamentarias aplicables.

**Artículo 121.** Las asesoras y asesores jurídicos serán asignados inmediatamente por la persona titular del área, sin más requisitos que la solicitud formulada por la víctima o a petición de alguna institución o de algún organismo de derechos humanos facultados para ello.

**Artículo 122**. Todo el personal de la Asesoría Jurídica será considerado como personal del servicio público de confianza.

**Artículo 123.** La Asesoría Jurídica estará a cargo de una Dirección General, nombrada por la persona titular de la Comisión Ejecutiva.

**CAPÍTULO III**

**DE LA ATENCIÓN BIOPSICOSOCIAL**

**Artículo 124.** El área de atención biopsicosocial será la encargada de brindar ayuda, asistencia y a coadyuvar en la reparación integral desde las dimensiones de salud física, mental, emocional y social, así como de la canalización para el tratamiento de condiciones médicas específicas a las instituciones competentes del Estado. Para ello, estará integrada por especialistas en medicina general, psicología, psiquiatría, pedagogía, y profesionistas técnicos de diversas disciplinas que se requieran para la atención y canalización para el tratamiento de las víctimas. Además, podrá contar con el personal de auxilio necesario para el cumplimiento de sus funciones.

**Artículo 125.** Tanto en caso de que la víctima haya contratado servicios particulares y no pueda continuar con estos, como en el caso de que no quiera o no pueda contratarlos, continuar con servicios particulares o necesite la atención como complemento, la Comisión Ejecutiva deberá nombrar personal especializado que se encargue de conformar y dar seguimiento a su expediente.

**Artículo 126.** La Dirección General de Atención Biopsicosocial tendrá facultades siguientes:

1. Realizar una entrevista inicial a la víctima, con la finalidad de evaluar y detectar sus necesidades y según el caso canalizarla con el personal competente del área o a las instituciones de salud que corresponda;
2. Realizar evaluaciones periódicas sobre el estatus y avance de la víctima para programar y evaluar la continuidad o finalización del tratamiento, para lo cual se deberá emitir un reporte final. Cuando lo amerite, se deberá ofrecer a la víctima un cambio de tratamiento que procure su recuperación;
3. Realizar todas las acciones necesarias para proveer, coordinar y canalizar los servicios de atención para víctimas a fin de garantizar un tratamiento adecuado, personalizado y eficiente que permita a las víctimas alcanzar la salud en sus dimensiones física, mental, emocional y social, ya sea a través de los servicios proveídos por la Comisión Ejecutiva o por las instituciones que integran el Sistema;
4. Dar seguimiento a todos los trámites y procedimientos que se realicen relacionados con la calidad de víctima, para procurar su integridad física y mental;
5. Llevar un registro puntual de los tratamientos y canalizaciones brindados a la víctima y formar un expediente del caso;
6. Informar a la víctima de forma clara, accesible, oportuna y detallada sobre el tipo, sentido y alcance potencial de servicios recibidos en el proceso y transición que le ayuden a sobreponerse al hecho victimizante;
7. Informar y asesorar a los familiares de la víctima o a las personas que decida, previa autorización, sobre su situación biopsicosocial procurando en todo momento salvaguardar su integridad;
8. Dar respuesta pericial sobre los requerimientos formulados por autoridades judiciales y órganos de procuración de justicia, respecto del daño físico, mental, emocional y social de la víctima, cuidando la confidencialidad y secrecía de los casos, con el objetivo de tasarlo, evaluarlo o acreditarlo; y
9. Las demás que se requieran para salvaguardar la salud física, mental y social de las víctimas.

**Artículo 127.** Todo el personal del área de atención biopsicosocial será considerado como personal del servicio público de confianza.

**Artículo 128.** El área de atención biopsicosocial estará a cargo de una Dirección General, nombrada por la persona titular de la Comisión Ejecutiva.

**CAPÍTULO IV**

**DE LA ATENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL**

**Artículo 129.** La Dirección General de Trabajo Social será la encargada de proveer los servicios sociales del Estado de México a la víctima para mejorar su situación personal y minimizar los impactos y consecuencias negativas del hecho victimizante a partir de las dimensiones social, cultural, educativa, familiar, económica, comunitaria y laboral.

Los servicios del área de trabajo social serán personalizados y tendrán como objetivo coadyuvar a la recuperación de la seguridad y confianza de la víctima, de acuerdo con sus necesidades específicas.

**Artículo 130.** La Comisión Ejecutiva deberá nombrar personal especializado que se encargue de conformar y dar seguimiento al expediente de la víctima en los términos del Reglamento.

**Artículo 131.** El área de trabajo social tendrá las funciones siguientes:

1. Realizar las entrevistas de primer contacto con la finalidad de conocer detalladamente las características sociales de la víctima y las consecuencias del hecho victimizante;
2. Evaluar el entorno social de las víctimas, con la finalidad, de identificar factores de riesgo generados por el hecho victimizante;
3. Analizar en conjunto con la víctima, las necesidades que surjan como consecuencia del hecho victimizante, para diseñar estrategias de intervención individual, grupal y comunitaria, incluyendo la detección de necesidades de atención jurídica y biopsicosocial para su debida canalización;
4. Gestionar y canalizar el apoyo interinstitucional, público y privado en los casos en los que se prevea pertinente, con la finalidad de ampliar la gama de servicios para la víctima;
5. Realizar las gestiones necesarias para llevar a cabo la vinculación correspondiente con las instituciones especializadas o programas sociales que, en lo particular, requieran las víctimas;
6. Mantener contacto permanente con las áreas de asesoría jurídica y de atención biopsicosocial para gestionar de manera oportuna y conjunta los servicios y apoyos que requiera la víctima;
7. Dar seguimiento sobre los servicios proporcionados a la víctima por la Comisión Ejecutiva y por las instituciones del Estado en cuanto a su consistencia y calidad;
8. Brindar orientación e información acerca de los servicios de la Comisión Ejecutiva;
9. Coadyuvar con las instancias de procuración y administración de justicia, en los procesos de investigación encaminados a garantizar el pleno ejercicio del derecho a la justicia de las víctimas, así como a la reparación del daño;
10. Cumplir de manera oportuna, con la emisión de dictámenes periciales en materia de Trabajo Social, encaminados a conocer las condiciones sociales y económicas de las víctimas, establecer las bases para la reparación del daño, o determinar el daño al proyecto de vida; y
11. Las demás que le fueran conferidas por la Ley, reglamentos y otras disposiciones legales, aplicables, así como aquellas que le sean encomendadas.

**Artículo 132.** Todo el personal del área de trabajo social será considerado como personal del servicio público de confianza.

**Artículo 133.** El área de atención de Trabajo Social estará a cargo de una Dirección General, nombrada por la persona titular de la Comisión Ejecutiva.

**CAPÍTULO V**

**DEL REGISTRO ESTATAL DE VÍCTIMAS**

**Artículo 134.** El Registro es la unidad administrativa y técnica cuya operación y funcionamiento se encuentra a cargo de la Comisión Ejecutiva que soporta todo el proceso de ingreso y registro de las víctimas en el Estado de México.

El Registro se encarga de llevar y salvaguardar el Registro Estatal de Víctimas, a nivel estatal, e inscribir los datos de las víctimas.

En la operación del Registro, se deberá intercambiar, recopilar sistematizar, analizar y actualizar la información que diariamente se genere en materia de víctimas para su debida integración.

La persona titular de la Comisión Ejecutiva dictará las medidas necesarias para la integración, recolección, administración y preservación de la información administrada y sistematizada en el Registro, a través de las áreas que la integran.

Los integrantes del Sistema estarán obligados a compartir con el Registro la información en materia de víctimas que obren en sus bases de datos.

**Artículo 135.** El Registro Estatal de Víctimas será alimentado por las siguientes fuentes:

1. Las solicitudes de ingreso hechas directamente por las víctimas, a través de su representante legal o de algún familiar o persona de confianza ante la Comisión Ejecutiva;
2. Las solicitudes de ingreso que presente cualquier autoridad, como responsable de ingresar el nombre de las víctimas al Registro;
3. Los registros de víctimas que se encuentren en cualquier institución o entidad estatal o municipal, así como de la Comisión o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en aquellos casos en donde se hayan dictado recomendaciones, medidas precautorias o bien se hayan celebrado acuerdos de conciliación; y
4. La información recolectada y sistematizada por las áreas de la Comisión Ejecutiva, en los términos del reglamento.

Las entidades e instituciones generadoras y usuarias de la información sobre las víctimas que posean actualmente registros de víctimas pondrán a disposición del Registro la información que generan y administran, de conformidad con lo establecido en las leyes que regulan el manejo de datos personales, para lo cual se suscribirán los respectivos acuerdos de confidencialidad para el uso de la información.

En los casos en que existiere soporte documental de los registros que reconocen la calidad de víctima, deberá entregarse copia digital al Registro. En caso de que estos soportes no existan, las entidades a que se refiere este artículo certificarán dicha circunstancia.

El contenido de la información transmitida al Registro será responsabilidad de cada persona del servicio público, unidad, dependencia, institución o autoridad, que reciban solicitudes de ingreso.

**Artículo 136.** Las solicitudes de ingreso se realizarán en forma gratuita, ante la Comisión Ejecutiva.

La información que acompaña la incorporación de datos al registro se consignará en el formato único de registro diseñado por la Comisión Ejecutiva y su utilización será obligatoria por parte de las autoridades responsables de garantizar el ingreso al mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley. El formato único de registro, con el que se incorporará a la víctima al registro deberá ser accesible a toda persona y de uso simplificado y buscará recoger la información necesaria para que la víctima pueda acceder plenamente a todos sus derechos, incluidos los que se le reconocen en la presente Ley.

La solicitud de inscripción de la víctima no implica de oficio su ingreso al Registro. Para acceder oportuna y efectivamente a las medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral previstos en esta Ley, deberá realizarse el ingreso, y valoración por parte de la autoridad correspondiente.

El ingreso al Registro podrá solicitarse y tramitarse de manera personal y directa por la víctima, o a través de representante que, además de cumplir con las disposiciones aplicables, esté debidamente inscrito en el padrón de representantes que al efecto establezca la Comisión Ejecutiva, conforme a lo establecido en el Reglamento.

**Artículo 137.** Para la inscripción de datos de la víctima en el Registro se deberá, como mínimo, tener la siguiente información:

1. Los datos de identificación de cada una de las víctimas que solicitan su ingreso o en cuyo nombre se solicita el ingreso, para ello se deberá mostrar u obtener una identificación oficial o documento que acredite su identidad;
2. Nombre completo, cargo y firma de la persona del servicio público de la entidad que recibió la solicitud de inscripción de datos al Registro y el sello de la dependencia;
3. La firma y huella dactilar de la persona que solicita el registro; en los casos que la persona manifieste no poder o no saber firmar, se tomará como válida la huella dactilar;
4. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar previas, durante y posteriores a la ocurrencia de los hechos victimizantes;
5. La persona del servicio público que recabe el relato de hechos, lo asentará en forma textual, completa y detallada en los términos que sea emitida;
6. Los datos de contacto de la persona que solicita el registro; y
7. La información del parentesco o relación afectiva con la víctima de la persona que solicita el registro, cuando no sea la víctima quien lo hace. En caso de que el ingreso lo solicite un servidor público deberá detallarse nombre, cargo y dependencia o institución a la que pertenece.

En el caso de faltar información, la Comisión Ejecutiva pedirá a la entidad que tramitó inicialmente la inscripción de datos, que complemente dicha información en el plazo máximo de diez días hábiles. Lo anterior no afecta, en ningún sentido, la garantía de los derechos de las víctimas que solicitaron en forma directa al Registro o en cuyo nombre el ingreso fue solicitado.

**Artículo 138.** Será responsabilidad de las entidades e instituciones que reciban solicitudes de ingreso al Registro:

1. Garantizar que las personas que solicitan el ingreso en el Registro sean atendidas de manera preferencial y orientadas de forma digna y respetuosa;
2. Para las solicitudes de ingreso en el Registro tomadas en forma directa, diligenciar correctamente, en su totalidad y de manera legible, el formato único de registro diseñado por la Comisión Ejecutiva;
3. Disponer de los medios tecnológicos y administrativos necesarios para el trámite de la solicitud, de acuerdo con los parámetros que la Comisión Ejecutiva determine;
4. Remitir el original de los relatos o declaraciones tomadas en forma directa, en un término de 3 días hábiles a la toma del relato de hechos a la Comisión Ejecutiva;
5. Orientar a la persona que solicite el ingreso sobre el trámite y efectos de la diligencia;
6. Recabar la información necesaria sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron el hecho victimizante, así como su caracterización socioeconómica, con el propósito de contar con información precisa que facilite su valoración;
7. En su caso, indagar las razones por las cuales no se llevó a cabo con anterioridad la solicitud de registro;
8. Verificar los requisitos mínimos de legibilidad en los documentos aportados y relacionar el número de folios que se adjunten con el relato de hechos;
9. Garantizar la confidencialidad, reserva y seguridad de la información y abstenerse de hacer uso de la información contenida en la solicitud de registro o del proceso de diligenciamiento para obtener provecho para sí o para terceros, o por cualquier uso ajeno a lo previsto en esta Ley, y a las relativas a la Protección de Datos Personales;
10. Entregar una copia o recibo o constancia de su solicitud de registro a las víctimas o a quienes hayan realizado la solicitud, y
11. Cumplir con las demás obligaciones que determine la Comisión Ejecutiva.

En ninguna circunstancia la autoridad podrá negarse a recibir la solicitud de registro a las víctimas a que se refiere la presente Ley.

**Artículo 139.** Presentada la solicitud, deberá ingresarse la misma al Registro, y se procederá a la valoración de la información recogida en el formato único de registro junto con la documentación remitida que acompañe dicho formato.

1. Para mejor proveer, la Comisión Ejecutiva, podrá solicitar la información que considere necesaria a cualquiera de las autoridades del orden federal, local y municipal, las que estarán en el deber de suministrarla en un plazo que no supere los diez días hábiles.
2. Si hubiera una duda razonable sobre la ocurrencia de los hechos se escuchará a la víctima o a quien haya solicitado la inscripción, quienes podrán asistir ante el Comité Multidisciplinario. En caso de hechos probados o de naturaleza pública deberá aplicarse el principio de buena fe a que hace referencia esta Ley.
3. La realización del proceso de valoración al que se hace referencia en los párrafos anteriores no suspende, en ningún caso, las medidas de ayuda de emergencia a las que tiene derecho la víctima.

Se deberá dar a conocer todas las actuaciones que se realicen a lo largo del proceso de registro a la víctima. Cuando sea un tercero quien solicite el ingreso, deberá notificársele por escrito si fue aceptado o no el mismo.

**Artículo 140.** No se requerirá la valoración de los hechos relatados cuando:

1. Exista sentencia condenatoria o resolución por parte de la autoridad judicial o administrativa competente;
2. Exista una determinación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de la Comisión que dé cuenta de esos hechos, incluidas recomendaciones, conciliaciones o medidas precautorias;
3. La víctima haya sido reconocida como tal por el Ministerio Público, por una autoridad judicial, o por un organismo público de derechos humanos, aun cuando no se haya dictado sentencia o resolución;
4. Cuando la víctima cuente con informe que le reconozca tal carácter emitido por algún mecanismo internacional de protección de derechos humanos al que el Estado Mexicano le reconozca competencia, y
5. Cuando la autoridad responsable de la violación a los derechos humanos le reconozca tal carácter.

**Artículo 141.** Se podrá cancelar la inscripción en el Registro cuando, después de realizada la valoración, incluido haber escuchado a la víctima o a quien haya solicitado la inscripción, la Comisión Ejecutiva encuentre que la solicitud de registro es contraria a la verdad respecto de los hechos victimizantes de tal forma que sea posible colegir que la persona no es víctima. La negación se hará en relación con cada uno de los hechos y no podrá hacerse de manera global o general.

La decisión que cancela el proceso de ingreso al Registro deberá ser fundada y motivada. Deberá notificarse personalmente y por escrito a la víctima, a su representante legal, a la persona debidamente autorizada por ella para notificarse, o a quien haya solicitado la inscripción, o algún otro medio fehaciente, en caso de no poderse agotar la notificación personal, con el fin de que la víctima pueda interponer, si lo desea, recurso de reconsideración de la decisión ante la Comisión Ejecutiva para que ésta sea aclarada, modificada, adicionada, revocada o confirmada de acuerdo con el procedimiento que establezca el Reglamento de la presente Ley.

La notificación se hará en forma personal, de forma física y/o electrónica a través de medios y cuentas oficiales, al correo electrónico o redes sociales que sean necesarios y que figuren en el formato único de registro o en los demás sistemas de información a fin de que comparezca a la diligencia de notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco días siguientes a la adopción de la decisión de no inclusión y de la diligencia de notificación se dejará constancia en el expediente.

**Artículo 142.** La información sistematizada en el Registro Estatal de Víctimas incluirá:

1. El relato del hecho victimizante, como quedó registrado en el formato único de registro. El relato inicial se actualizará en la medida en que se avance en la respectiva investigación penal o a través de otros mecanismos de esclarecimiento de los hechos;
2. La descripción del daño sufrido;
3. La identificación del lugar y la fecha en donde se produjo el hecho victimizante;
4. La identificación de la víctima o víctimas del hecho victimizante;
5. La identificación de la persona o entidad que solicitó el registro de la víctima, cuando no sea ella quien lo solicite directamente;
6. La identificación y descripción detallada de las medidas de ayuda y de atención que efectivamente hayan sido garantizadas a la víctima;
7. La identificación y descripción detallada de las medidas de reparación que, en su caso, hayan sido otorgadas a la víctima;
8. La identificación y descripción detallada de las medidas de protección que, en su caso, se hayan brindado a la víctima; y
9. En su caso, el documento que acredite la calidad de víctima.

La información que se asiente en el Registro deberá garantizar que se respete el enfoque diferencial.

Para la sistematización de la información asentada en el Registro, éste deberá coordinarse con las áreas que al efecto determine la persona titular de la Comisión Ejecutiva, en los términos del Reglamento.

**Artículo 143.** La Comisión Ejecutiva elaborará un plan de divulgación, capacitación y actualización sobre el procedimiento para la recepción del relato de hechos y su trámite hasta la decisión de inclusión o no en el Registro. Las entidades encargadas de recibir y tramitar la inscripción de datos en el Registro garantizarán la implementación de este plan.

**Artículo 144**. Para el registro de la información sistematizada, la Comisión Ejecutiva elaborará instrumentos de identificación, valoración y sistematización de información a través de las áreas pertinentes en los términos del reglamento.

**SECCIÓN A**

**INGRESO DE LA VÍCTIMA AL REGISTRO**

**Artículo 145.** El ingreso de la víctima al Registro se hará por la denuncia, la queja, o la denuncia de hechos que podrá realizar la propia víctima, la autoridad, el organismo público de protección de derechos humanos o un tercero que tenga conocimiento sobre los hechos.

**Artículo 146.** Toda autoridad que tenga contacto con la víctima estará obligada a recibir su relato de hechos, la cual consistirá en una narración de los hechos con los detalles y elementos de prueba que la misma ofrezca, la cual se hará constar en el formato único de registro. El Ministerio Público, las defensoras y defensores públicos, las asesoras y asesores jurídicos de las víctimas y las comisiones de derechos humanos no podrán negarse a recibir el relato de hechos.

Cuando las autoridades citadas no se encuentren accesibles, disponibles o se nieguen a recibir el relato de hechos, la víctima podrá acudir a cualquier otra autoridad estatal o municipal para realizarlo, las cuales tendrán la obligación de recibirla.

Cuando quien vaya a rendir su relato de hechos sean personas privadas de la libertad las autoridades que estén a cargo de los centros de reinserción social estarán obligadas a recibirla.

**Artículo 147.** Cualquier autoridad, así como los particulares que tengan conocimiento de un delito o violación a derechos humanos, tendrá la obligación de ingresar el nombre de la víctima al Registro, aportando con ello los elementos que tenga a la Comisión Ejecutiva, la cual tendrá la obligación de recabar la información faltante para su registro.

Cuando la víctima sea menor de edad, podrá solicitar su ingreso al registro por sí misma, a través de sus representantes, o a través de las autoridades.

En el caso de víctimas de desplazamiento interno que se encuentren en una entidad federativa distinta de su entidad de origen la Comisión Ejecutiva y las Comisiones Ejecutivas en el ámbito de sus competencias, cuando proceda, garantizarán su debido registro, atención y reparación, en términos de esta Ley.

**Artículo 148.** Una vez recibido el relato de hechos, el personal del servicio público deberá llevar a cabo las siguientes acciones:

1. Hacer del conocimiento de la Comisión Ejecutiva en un término que no excederá de veinticuatro la información necesaria para cumplir con sus obligaciones;
2. Denunciar de inmediato la comisión del delito o la violación de derechos humanos ante la autoridad competente; y
3. Canalizar a las víctimas ante las autoridades competentes de acuerdo con lo establecido en esta Ley, su reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

**CAPÍTULO VI**

**DEL FONDO ESTATAL DE AYUDA,**

**ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL**

**SECCIÓN A**

**OBJETO E INTEGRACIÓN**

**Artículo 149.** El Fondo es la Dirección General de la Comisión Ejecutiva que tiene por objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia, atención, traslado y reparación integral de las víctimas siguiendo los principios de publicidad, oportunidad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción, de conformidad con lo establecido en esta Ley.

La víctima podrá acceder de manera subsidiaria al Fondo en los términos de esta Ley, sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones administrativas, penales y civiles que resulten.

**Artículo 150.** Para ser beneficiarios del apoyo del Fondo, además de los requisitos que al efecto establezca esta Ley, su Reglamento y sus Reglas de Operación, las víctimas deberán estar inscritas en el Registro a efecto de que la Comisión Ejecutiva realice una evaluación integral de su entorno familiar y social con el objeto de contar con los elementos suficientes para determinar las medidas de ayuda, asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, la compensación.

**Artículo 151.** El Fondo se integrará por:

1. Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos del Estado en el rubro correspondiente, sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin distinto y sin que pueda ser disminuido;
2. El producto de la enajenación de los bienes decomisados en los procedimientos penales, en la proporción que corresponda, una vez cubierta la compensación, en los términos establecidos por el Código Nacional de Procedimientos Penales o en la legislación aplicable;
3. Recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando los procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad;
4. El monto de las reparaciones del daño no reclamadas;
5. Donaciones que en efectivo o en especie hagan personas físicas o morales de carácter público, privado o social;
6. Los rendimientos generados por los recursos del Fondo;
7. Reasignaciones presupuestales de otros programas;
8. Los montos que se recuperen en virtud del derecho de repetición en los términos de esta Ley; y
9. Los demás ingresos que le sean asignados;

**Artículo 152**. La suma de las asignaciones anuales que sean aportadas al Fondo será al menos del 60% de la asignación que se destine en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate al Fondo Federal.

En caso de que la aportación señalada en el párrafo anterior al Fondo Federal sea reducida, no se podrá asignar una cantidad menor al Fondo Estatal a la asignada en el Ejercicio Fiscal anterior a la reducción.

La aportación anual que deberá realizar el Estado de acuerdo con los párrafos anteriores, se calculará con base en un factor poblacional equivalente a la proporción de su población con respecto del total nacional, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La aportación anual se deberá efectuar, a más tardar al 31 de marzo de cada ejercicio.

**Artículo 153.** De los recursos que constituyan el patrimonio de cada uno de los Fondos estatales, se deberá mantener una reserva del 20% para cubrir los reintegros que, en su caso, deban realizarse al Fondo, de acuerdo con lo establecido en esta Ley.

**Artículo 154.** La constitución del Fondo será con independencia de la existencia de otros ya establecidos para la atención a víctimas. La aplicación de recursos previstos en otros mecanismos en favor de la víctima se hará de manera complementaria a fin de evitar su duplicidad.

**Artículo 155.** El acceso a los recursos en favor de cada víctima no podrá ser superior a los límites establecidos en esta Ley y las disposiciones correspondientes.

**Artículo 156.** La organización y funcionamiento del Fondo se establecerá en sus Reglas de Operación y en el Reglamento de la Ley.

**Artículo 157.** La Comisión Ejecutiva velará por la maximización del uso de los recursos del Fondo, priorizando en todo momento aquellos casos de mayor gravedad.

**Artículo 158.** El Fondo estará exento de toda imposición de carácter fiscal y parafiscal, así como de los diversos gravámenes a que puedan estar sujetas sus operaciones.

**Artículo 159.** Cuando proceda el pago de la reparación, el Fondo registrará el fallo judicial que lo motivó y el monto de la indemnización, que será de consulta pública, con la reserva de los datos personales de la víctima, en términos de la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

**Artículo 160.** El Fondo estará a cargo de una Dirección General, nombrada por la persona titular de la Comisión Ejecutiva.

**SECCIÓN B**

**DE LA ADMINISTRACIÓN**

**Artículo 161.** El Fondo será administrado y operado por un fideicomiso público a través de una institución de banca de desarrollo que funja como fiduciaria, de acuerdo con las instrucciones de la Comisión Ejecutiva en su calidad de fideicomitente, siguiendo criterios de transparencia, oportunidad, eficacia, eficiencia, rendición de cuentas y anticorrupción para proveer y aplicar los recursos en favor de las víctimas.

**Artículo 162.** Independientemente de los proyectos de dictamen de acceso a los recursos del Fondo para el otorgamiento de los Recursos de Ayuda, por casos de urgencia o emergencia justificada, se podrán realizar las siguientes acciones:

1. El Consejo Consultivo, previo dictamen del Comité Multidisciplinario, podrá adjudicar parte de los recursos del Fondo para crear fondos de emergencia con duración temporal limitada para casos de necesidad extraordinaria;
2. La persona titular de la Comisión Ejecutiva podrá autorizar los trámites administrativos y financieros que sean necesarios para la obtención de los recursos del Fondo que se requieran para la atención de casos urgentes, atendiendo a las necesidades de atención inmediata.

**Artículo 163.** La persona titular de la Comisión Ejecutiva con el apoyo la persona del servicio público designada por esta para realizar los actos que le corresponden a aquélla en calidad de fideicomitente del Fondo deberá:

1. Vigilar que los recursos que conforman el Fondo se administren y ejerzan adecuadamente a fin de permitir el cumplimiento efectivo del objeto de esta Ley;
2. Gestionar lo pertinente para que los recursos asignados al Fondo ingresen oportunamente al mismo;
3. Presentar periódicamente informes y rendición de cuentas al Sistema Estatal; y
4. Realizar las previsiones necesarias a fin de procurar la solvencia del Fondo.

**Artículo 164.** La auditoría de los recursos del Fondo, al igual que todos los demás ejercidos por parte de la Comisión Ejecutiva, podrá llevarse a cabo anualmente por las instituciones públicas facultadas para ello, o por instituciones públicas o privadas por solicitud de la propia Comisión Ejecutiva cuando se estime necesario.

**Artículo 165.** El Estado, representado por la Comisión Ejecutiva se subrogará en los derechos de las víctimas para cobrar el importe que por concepto de compensación haya erogado en su favor con cargo al Fondo. Para tal efecto, se aportarán al Estado los elementos de prueba necesarios para el ejercicio de los derechos derivados de la subrogación.

El Ministerio Público estará obligado a ofrecer los elementos probatorios señalados en el párrafo anterior, en los momentos procesales oportunos, a fin de garantizar que sean valorados por el juzgador al momento de dictar sentencia, misma que deberá prever de manera expresa la subrogación a favor del Estado en el derecho de la víctima a la reparación del daño y el monto correspondiente a dicha subrogación, en los casos en que así proceda.

En el caso de las compensaciones por error judicial, éstas se cubrirán con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de México.

**Artículo 166.** El Estado ejercerá el procedimiento económico coactivo para hacer efectiva la subrogación del monto de la reparación conforme a las disposiciones aplicables, sin perjuicio de que dicho cobro pueda reclamarse por la víctima en la vía civil, para cobrar la reparación del daño del sentenciado o de quien esté obligado a cubrirla, en términos de las disposiciones que resulten aplicables.

**Artículo 167.** En los casos de reparación a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, que sean compensadas económicamente o reparadas por la Comisión Ejecutiva, está tendrá el derecho de repetir en contra de los responsables.

Tal monto deberá ser reembolsado por las autoridades del Estado dentro del siguiente año, y presupuestado dentro del ejercicio fiscal correspondiente y en el caso de particulares sentenciados una vez que concluya el procedimiento para hacer valer el derecho de repetición.

**Artículo 168.** El Reglamento precisará el funcionamiento, alcance y criterios específicos de asignación de recursos del Fondo.

**SECCIÓN C**

**DEL PROCEDIMIENTO.**

**Artículo 169.** La víctima podrá acceder de manera subsidiaria al Fondo cuando se cumplan los requisitos siguientes:

1. Esté inscrita en el Registro Estatal de Víctimas a efecto de que la Comisión Ejecutiva realice una evaluación integral, con el objeto de contar con los elementos suficientes para determinar las medidas de ayuda, asistencia, protección, reparación integral y en su caso, la compensación;
2. Presente una solicitud de asistencia, ayuda o reparación integral ante la Comisión Ejecutiva;
3. Cuente con sentencia ejecutoria en la que se indique que sufrió el daño por el hecho victimizante, así como el monto a pagar y/u otras formas de reparación o cuente con un acuerdo emitido por la Comisión Ejecutiva;
4. El pago de los daños causados no haya sido reparado en su totalidad por la persona responsable;
5. No haya recibido la reparación integral del daño por cualquier otra vía, lo que podrá acreditarse con el oficio del juez de la causa penal o con otro medio fehaciente;
6. Entregue documentos, pruebas e información requeridas por la Comisión Ejecutiva en los términos del Reglamento; y
7. Compruebe el ejercicio por el monto del recurso a más tardar a los treinta días posteriores de haberlo recibido. Para ello, el Reglamento establecerá los criterios de comprobación, y las instituciones que podrán auxiliar en la certificación del gasto.

**Artículo 170.** Una vez recibida la solicitud de acceso al Fondo, la Comisión Ejecutiva remitirá al Comité Multidisciplinario, para la integración del expediente respectivo en un plazo no mayor a quince días hábiles, para analizar, valorar y concretar las medidas que se otorgarán considerando como mínimo:

1. Los documentos presentados por la víctima;
2. Descripción del daño o daños que haya sufrido la víctima;
3. Detalle de las necesidades que requiera la víctima para enfrentar las consecuencias del delito o de la violación a sus derechos humanos,
4. La condición socioeconómica de la víctima;
5. La repercusión del daño en la víctima y en su vida familiar;
6. La imposibilidad de trabajar como consecuencia del daño;
7. En caso de contar con ello, relación de partes médicos o psicológicos donde detallen las afectaciones que tiene la víctima con motivo de la comisión del delito o de la violación a los derechos humanos;
8. El número y la edad de los dependientes económicos,
9. Detalle de las necesidades que requiera la víctima para enfrentar las consecuencias del delito o de la violación a sus derechos humanos,
10. Los recursos disponibles en el Fondo; y
11. Los demás requisitos que determinen el Reglamento, las Reglas de Operación del Fondo y las demás disposiciones legales aplicables.

En el caso de la solicitud de ayuda o apoyo deberán agregarse, además:

1. Estudio de trabajo social elaborado por la Dirección General de Trabajo Social en el que se haga una relación de las condiciones de victimización que enfrenta la víctima y las necesidades que requiere satisfacer para enfrentar las secuelas del hecho victimizante;
2. Dictamen médico donde se especifique las afectaciones sufridas, las secuelas y el tratamiento, prótesis y demás necesidades que requiere la persona para su recuperación;
3. Dictamen psicológico y de ser necesario, psiquiátrico, en caso de que la víctima requiera atención a la salud mental donde se especifique las necesidades que requieren ser cubiertas para la recuperación de la víctima, y
4. Las demás que determinen el Reglamento, las Reglas de Operación del Fondo y las disposiciones legales aplicables.

La víctima sólo estará obligada a entregar la información, documentación y pruebas que obren en su poder. Es responsabilidad del Comité Multidisciplinario lograr la integración del expediente respectivo.

Integrado el expediente, el Comité Multidisciplinario en un plazo no mayor a veinte días hábiles determinará el apoyo o ayuda que requiere la víctima con una propuesta de resolución justificada con la fundamentación y motivación pertinente e individualizada que sea necesaria.

Para el otorgamiento de las medidas, el Comité Multidisciplinario podrá determinar cuáles medidas serán proporcionadas por parte de las instituciones del Sistema y cuales por parte de la Comisión Ejecutiva de acuerdo con los principios de solidaridad y subsidiariedad regulados en esta ley.

Las determinaciones respecto a cualquier tipo de pago, compensación o reparación del daño tendrán el carácter de resoluciones administrativas definitivas, contra las que procederá el juicio de amparo.

**Artículo 171.** El procedimiento para el otorgamiento de la ayuda será determinado en el reglamento de la ley.

**SECCIÓN D**

**DE LA REPARACIÓN**

**Artículo 172.** La Comisión Ejecutiva se abocará a obtener la información conducente, así como a elaborar los estudios correspondientes, para determinar la necesidad del otorgamiento y la procedencia de los apoyos solicitados por las víctimas y emitirá su opinión con relación a la procedencia de su otorgamiento.

**Artículo 173.** Si las autoridades obligadas no pudiesen hacer efectiva total o parcialmente la orden de compensación o reparación integral, establecida por mandato judicial o por acuerdo de la Comisión Ejecutiva, deberán justificar la razón y tomar las medidas suficientes para cobrar su valor o gestionar lo pertinente a fin de lograr que se concrete la reparación integral de la víctima.

**Artículo 174.** Cuando la determinación y cuantificación del apoyo y reparación no haya sido dada por autoridad judicial u organismo nacional o internacional de protección de los derechos humanos, ésta deberá ser realizada por la Comisión Ejecutiva. Si la misma no fue documentada en el procedimiento penal, esta Comisión procederá a su documentación e integración del expediente conforme se señala en esta Ley y demás disposiciones reglamentarias.

**Artículo 175.** Cuando parte del daño sufrido se explique a consecuencia del actuar u omitir de la víctima, dicha conducta podrá ser tenida en cuenta al momento de determinar la indemnización.

**Artículo 176.** Cuando se advierta falsedad en la información proporcionada por el solicitante a la Comisión Ejecutiva, esta podrá suspender cualquier apoyo, sin perjuicio de fincar las responsabilidades correspondientes y, en tal caso, dará vista al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones respectivas en el ejercicio de sus atribuciones.

**Artículo 177**. La entrega de los recursos a las víctimas se podrá hacer directamente, en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios, mediante vales o en especie salvo en las localidades donde no haya disponibilidad de servicios bancarios, exista una necesidad, situación o emergencia justificable, en cuyo caso se podrán entregar en efectivo.

La entrega y comprobación de los recursos se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en el Reglamento.

En ningún caso, la reparación integral podrá ser igual o mayor a los recursos del Fondo.

La compensación subsidiaria se otorgará en aquellos casos en que la víctima haya sufrido menoscabo, o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física y/o mental, siempre y cuando exista una sentencia firme que no se haya podido ejecutar, cuyo monto será hasta de dos mil quinientas unidades de medida y actualización, debiendo ser proporcional sin implicar el enriquecimiento para la víctima.

En todo caso, se deberá tomar en consideración la perspectiva de género y en los casos de los delitos de feminicidio y homicidio doloso de mujeres por razones de género, la compensación subsidiaria podrá ser de hasta cinco mil unidades de medida y actualización y sí este se presentará en transporte público de pasajeros, oficiales, escolares en servicio u otros, dicha cantidad podría elevarse hasta tres veces.

**Artículo 178.** Cuando el daño haya sido causado por más de un agente y no sea posible identificar la exacta participación de cada uno de ellos, se establecerá una responsabilidad solidaria y subsidiaria frente a la víctima entre ellos, y se distribuirá el monto del pago de la indemnización en partes iguales entre todos los causantes previo acuerdo de la Comisión Ejecutiva.

**Artículo 179.** La reparación integral deberá calcularse mediante moneda nacional, con la excepción de que se podrá pagar en especie de acuerdo con la resolución dictada por la Comisión Ejecutiva.

**Artículo 180.** La Comisión Ejecutiva tendrá facultades para cubrir las necesidades en términos de asistencia, ayuda y reparación integral, a través de los programas gubernamentales estatales o municipales con que se cuente.

**CAPÍTULO VII**

**DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS**

**Artículo 181**: La Unidad Especializada en Violaciones a Derechos Humanos, será la Dirección General encargada de promover la cultura de los derechos humanos al interior y exterior de la Comisión Ejecutiva, llevar el seguimiento de atenciones y procedimientos relacionados con las víctimas de violaciones de derechos humanos atendidas por la comisión, así como de la transversalización de la política de atención con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interseccionalidad.

**Artículo 182.** El área especializada en violaciones a derechos humanos tendrá las funciones siguientes:

1. Ser el enlace con las instancias Federales, Estatales y Municipales encargadas de la atención a la política de derechos humanos de las víctimas;
2. Realizar las propuestas de dictamen de reparación integral del daño en el caso de violaciones a derechos humanos y delitos;
3. Coordinar, orientar y dar seguimiento a los trabajos y tareas de protección y defensa de los derechos humanos de las víctimas;
4. Sistematizar la información relativa al cumplimiento de las recomendaciones;
5. Coadyuvar con las autoridades responsables en el cumplimiento de las recomendaciones de violaciones a derechos humanos;
6. Fungir como vínculo entre la Comisión y las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos, así como atender y, en su caso, remitir a las instancias competentes las peticiones que éstas le formulen, sin perjuicio de las atribuciones de otras unidades administrativas de la Secretaría;
7. Vincular sus acciones con organismos municipales, estatales, nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, para la colaboración y atención de asuntos en esta materia;
8. Identificar y compilar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que asuma el Estado mexicano, así como promover y coadyuvar con las dependencias y entidades de la Administración Pública para dar cumplimiento a éstos;
9. Impulsar la institucionalización de la Perspectiva de Género y la Igualdad de Género en el quehacer administrativo y de atención a víctimas;
10. Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de derechos humanos emitidas contra cualquier autoridad del ámbito estatal o municipal;
11. Impulsar la institucionalización de la atención especializada a grupos en situación de vulnerabilidad incluyendo la perspectiva de interseccionalidad; y
12. Las demás que le fueran conferidas por la Ley, reglamentos y otras disposiciones legales, aplicables, así como aquellas que le sean encomendadas.

**Artículo 183.** Las autoridades responsables deberán informar a la Comisión Ejecutiva, bajo apercibimiento sobre el cumplimiento de los demás puntos recomendatorios.

**Artículo 184.** La Unidad Especializada en Violaciones a Derechos Humanos estará a cargo de una Dirección General, nombrada por la persona titular de la Comisión Ejecutiva.

**CAPÍTULO VIII**

**DEL CENTRO ESTATAL DE MEMORIA, VERDAD**

**Y JUSTICIA EN EL ESTADO DE MÉXICO**

**Artículo 185.** El Centro para la Construcción de Memoria, Verdad y Justicia en el Estado de México será la Dirección General de la Comisión Ejecutiva, encargada de la investigación y estudio para recuperar y construir la memoria histórica y social de las víctimas a partir de los relatos colectivos sobre las violaciones a derechos humanos y procesos victímales de larga data en diversos contextos con el objetivo de generar conocimiento especializado basado en los principios de justicia, memoria, verdad, y no repetición, mediante un método interdisciplinario, que permita la elaboración de la política pública en materia víctimal.

Contribuirá activamente en la generación de planes de acción y estrategias académicas, institucionales y de política pública que incidan en los procesos legislativos, programas e iniciativas en materia de prevención, seguridad, atención, sanción de delitos de alto impacto y violaciones de derechos humanos en contra de la ciudadanía, que permitan acercar a las víctimas a procesos más eficaces y eficientes; y a la verdad, justicia y memoria, como parte de los procesos de recuperación de sus proyectos de vida.

**Artículo 186.** El centro estatal de memoria tendrá las funciones siguientes:

1. Realizar estudios, investigaciones y eventos que fortalezcan la garantía y protección de los derechos de las víctimas y la Justicia Transicional;
2. Realizar acciones específicas tendientes a fomentar la participación de las víctimas en los procesos de reparación integral;
3. Realizar diagnósticos sobre las atenciones brindadas a víctimas;
4. Coordinar estudios que beneficien los procesos de resiliencia de las víctimas;
5. Proponer mecanismos de Justicia Transicional;
6. Elaboración de un legado testimonial y documental de las víctimas;
7. Contribuir en el derecho a la verdad y la construcción de la paz;
8. Realizar informes periódicos que contengan nuevas propuestas de recomendaciones de política pública y garantías de no repetición derivadas de los estudios impulsados por el Centro, con la participación de las propias víctimas;
9. Realizar y coordinar proyectos especiales; y
10. Las demás que le fueran conferidas por la Ley, reglamentos y otras disposiciones legales, aplicables, así como aquellas que le sean encomendadas.

**Artículo 187.** El Centro para la Construcción de Memoria, Verdad y Justicia en el Estado de México estará a cargo de una Dirección General, nombrada por la persona titular de la Comisión Ejecutiva.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

**SEGUNDO.** Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".

**TERCERO.** Se abroga la Ley de Víctimas del Estado de México publicada en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el 17 de agosto de 2015.

**CUARTO.** El Ejecutivo Estatal expedirá las disposiciones reglamentarias de la presente Ley en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto.

**QUINTO.** Los recursos y operación del Fondo se mantendrán en el estado en el que se encontraban antes de la abrogación de la Ley de Víctimas del Estado de México y únicamente deberá ajustarse en lo aplicable a lo establecido por esta ley y su reglamento al momento de su entrada en vigor. Las reglas de operación del Fondo deberán emitirse a los 15 días hábiles de la expedición del Reglamento.

**SEXTO.** Todos los procedimientos llevados a cabo con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley seguirán su curso en términos de la legislación vigente al momento del Registro.

**SÉPTIMO.** El Ejecutivo, deberá realizar las acciones correspondientes para garantizar los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para el cumplimiento de lo establecido en esta ley, para lo cual deberá presentar la propuesta en el siguiente Presupuesto de Egresos del Estado.

Para ello, se aumentará el personal de la Comisión Ejecutiva en la proporción necesaria para cumplir con lo establecido en la ley.

**OCTAVO.** La elección de los miembros del Consejo Ciudadano a que se refiere el artículo 106 de la Ley, se llevará a cabo en ternas, la primera completará el término de tres años en su encargo, la segunda durará un año y la tercera dos años, al término de los cuales, se elegirán nuevas ternas, para cumplir con el escalonamiento.

1. Es decir, 2,466,122 hogares víctimas de un total de 4,681,753 hogares estimados. [↑](#footnote-ref-1)
2. Comisión Nacional de Derechos Humanos. (mayo, 2019). **Informe Especial sobre los Linchamientos en el Territorio Nacional.** noviembre 3, 2020, de CNDH e Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sitio web: [https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/IE\_2019-Linchamientos](https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/IE_2019-Linchamientos.pdf). [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibidem,* p. 213. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibidem,* p.p. 43 - 44 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Idem.* [↑](#footnote-ref-5)
6. Es necesario, establecer que no existe una perspectiva que permita homologar un concepto único de víctima, dado que, desde los instrumentos internacionales hasta las legislaciones locales, han elaborado diferentes definiciones. No existe un tratado internacional que regule a las víctimas de manera integral sino una serie de tratados y declaraciones que regulan aspectos específicos.

   Sin embargo, el Estándar Internacional de Derechos Humanos aplicado a las Víctimas: la **Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder**, puede dar una visión más clara, pues su concepto de víctima es el más utilizado en las legislaciones del mundo y en las distintas convenciones internacionales.

   En su artículo 1, de la Sección A. Relativos a las víctimas de delitos establece lo siguiente: “*1. … las* ***personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños****, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales,* ***como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros****, incluida la que proscribe el abuso de poder.”*

   Con relación al artículo anterior, el artículo 2, establece que la definición del concepto de víctima, se debe incluir a las personas que tengan relación inmediata con la víctima y a aquellas que hayan sufrido daños al intervenir a la víctima o al prevenir la victimización: “*2. Podrá considerarse "víctima" a una persona, con arreglo a la presente Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima****. En la expresión "víctima" se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización****.”*

   Por otro lado, en su sección B, artículo 18, la Declaración establece lo siguiente: “*18. Se entenderá por "víctimas"* ***las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños,*** *inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales,* ***como consecuencia de acciones u omisiones que*** *no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero* ***violen normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos.”***

   Del texto citado, podemos observar que regula en primer lugar a las víctimas a partir del daño que como consecuencia de una violación a la ley penal vigente sufren, las regula también como individuos y como colectivo, pudiendo considerar a cada víctima por el daño directo o aquel que es sufrido con relación a las víctimas directas, es decir, esta Declaración, **regula a las víctimas directas, indirectas, individuales y colectivas.**

   Por su parte, es relevante considerar lo establecido en los **Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, establecen un concepto donde también se considera a víctimas directas e indirectas:** “*8. A los efectos del presente documento,* ***se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario.*** *Cuando corresponda, y en conformidad con el derecho interno,* ***el término “víctima” también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización”. “****9. Una persona* ***será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado y de la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima.”***

   En este caso, como se puede observar, el centro son las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario.

   De la conjunción de los anteriores instrumentos, podemos observar la claridad, desde el punto de vista internacional, bajo la cual se consideran a las víctimas directas e indirectas: tanto desde el perfil de las vulneraciones que sufren en sus derechos en los ámbitos del derecho penal y de los derechos humanos.

   Por otra parte, hay que hacer la distinción que en México la Constitución Federal no regula directamente el concepto de víctima, sino que únicamente regula una serie de derechos, dirigidos a los que denomina víctimas y ofendidos en el apartado C de su artículo 20.

   En la Ley Fundamental, sin embargo, en el artículo 73, fracción XXIX-X, se regula la facultad del Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Víctimas, para establecer la concurrencia de la federación, las entidades federativas, los municipios y, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las víctimas y donde sí se regula con mayor profundidad el concepto de víctima.

   La **Ley General de Víctimas** (LGV) establece, en su artículo 6, fracción XIX, que la víctima es aquella persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito, sin embargo, informa de mejor manera sobre el concepto de víctimas, desglosándolo expresamente en víctimas directas, indirectas y potenciales, y tácitamente víctimas de tipo colectivo para crear un marco legislativo nacional.

   Considera, en su artículo 4, párrafo primero, como **víctimas directas** aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

   Por otro lado, las **víctimas indirectas** son los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella (art. 4, párrafo segundo, de la LGV).

   Las **víctimas potenciales** son las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito (art. 4, párrafo tercero, de la LGV).

   Y finalmente, las **víctimas colectivas**, son los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos (art. 4, párrafo cuarto de la LGV).

   En la legislación de las diferentes entidades federativas del país, la víctima es regulada de manera muy diversa: la mayoría de las legislaciones locales, se regula a la víctima, haciendo las distinciones conceptuales de la Ley General, sin embargo, existe una divergencia, pues otras entidades, regulan a las víctimas indirectas como “ofendidos” tal y como se menciona en la Constitución, pero definiéndolas de manera idéntica o muy cercana a la Ley General.

   Esta última situación en la regulación, sin embargo, es inadecuada pues lo que hace más importante la condición de una persona que ha sufrido un menoscabo por su relación con la víctima directa, **no es la “ofensa” sino precisamente esa relación con el delito o la violación a los derechos humanos, la que le pone en una situación personal que la afecta indirectamente, pero en su individualidad.**

   Además, como se puede observar de la lectura de los instrumentos internacionales más importantes en la materia, en ningún caso se regula a las víctimas como “ofendidos”, sino como víctimas directas e indirectas.

   Es importante mencionar que, si bien el apartado C del Artículo 20 Constitucional, no regula precisamente el concepto de víctima, sino que simplemente hace referencia a los conceptos de víctima y ofendido al regular un catálogo de derechos reconocidos para ellos representa un problema, pues en lugar de haberse tomado como referencia estándar internacional sobre víctimas directas e indirectas, se tomó como referencia el Código Penal para el concepto de víctimas y ofendidos. [↑](#footnote-ref-6)
7. Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ratificado por los Estados Unidos Mexicanos el tres de febrero de dos mil tres. [↑](#footnote-ref-8)